



Concesiones de Tierra: una Causa Subyacente de Deforestación

Boletín del WRM 260

Marzo 2022

[Acceda al boletín de el sitio web del WRM](#)

[SUBSCRÍBITE](#)

Tabla de contenidos

Nuestra Opinión:

La fiebre por las Concesiones de Carbono: más robo de tierras y deforestación.....	2
Colonización y plantaciones de monocultivos: historias de ‘acaparamientos’ a gran escala.....	5
Colonialismo forestal en Tailandia.....	11
Concesiones Forestales, un concepto colonial.....	14
Un siglo de agrocolonialismo en la RD del Congo.....	17
PETAR sin concesión: luchar contra la privatización es una lucha de las mujeres.....	22
El modelo de concesión del sudeste asiático: ¿cerrando el círculo?.....	27
Las concesiones de conservación como una forma de neocolonización: La Red de Parques Africanos.....	31

RECOMENDADOS

“La historia colonial y la crisis ambiental están estrechamente ligadas”.....	37
Títulos de tierra del Grupo Jari Celulose en Brasil declarados ilegales.....	37
A la vanguardia: Historias de resistencia de mujeres africanas	37
La memoria colectiva del Pueblo Madja en Brasil.....	37
Total anuncia más acaparamientos de tierras para compensar sus emisiones.....	38

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: Land Watch Thai, Tailandia; Coordinador de LEMTO -Laboratorio de Estudios de Movimientos Sociales y Territorios- de la Universidade Federal Fluminense, Brasil; GRAIN; Sempre Viva Organização Feminista (SOF), Brasil, junto a un representante de las comunidades de Iporanga y del Colectivo de Mujeres del PETAR; un Profesor Emérito de Geografía Humana, Universidad de Sídney, Australia; y miembros del Secretariado Internacional del WRM.

NUESTRA OPINIÓN

La fiebre por las Concesiones de Carbono: más robo de tierras y deforestación

Este boletín se centra en una causa central de deforestación y del despojo a gran escala que sufren los pueblos de los bosques: la imposición de concesiones de tierras como instrumento para separar, dividir y cartografiar la tierra en beneficio de intereses económicos y políticos. Esta editorial alerta sobre el acaparamiento de grandes cantidades de hectáreas para Concesiones de Carbono.

Este boletín centra su atención en lo que el Secretariado del WRM considera como una causa central de deforestación y del despojo a gran escala que sufren los pueblos de los bosques: la imposición de concesiones de tierras como instrumento para separar, dividir y cartografiar la tierra (y los bosques) para beneficio de determinados intereses económicos y políticos.

No es un tema fácil. Nos obliga a reflexionar profundamente sobre las percepciones dominantes en torno a la 'tierra', cómo intentan aislarla violentamente del resto de la 'naturaleza', incluidos quienes la habitan, y cómo los colonizadores y las élites capitalistas la han estado organizando y utilizando según sus intereses.

Algunos artículos de este boletín exploran historias de la época colonial sobre cómo se impusieron y resistieron las concesiones en el Amazonas, el Sudeste Asiático y la cuenca del Congo. En algunos casos, como los artículos centrados en la RD Congo y Tailandia, es posible comprender claramente las repercusiones directas y profundas que estas historias tienen en la actual violencia, discriminación y luchas por la tierra. El artículo centrado en la resistencia de las mujeres en Brasil, alerta sobre cómo la privatización de las concesiones de conservación es una grave amenaza para los medios de vida y las culturas de las poblaciones locales. Otro artículo alerta sobre la presión internacional para crear más Áreas Protegidas 'sin personas' y denuncia la tendencia actual de privatizar la gestión de estos Parques, en particular en el continente africano.

En estrecha relación con esta avanzada por más Áreas Protegidas, existe el grave riesgo de una gran expansión de otro tipo de concesiones para ejercer el control sobre las tierras de bosques tropicales: las Concesiones de Carbono. Estas concesiones tienen como objetivo controlar, en particular, el carbono convertido en mercancía guardado en el bosque y otros llamados 'servicios ecosistémicos'. Los actores, como ONG conservacionistas internacionales, empresas multinacionales, corredores de bolsa, bancos, comerciantes, organismos de certificación, gobiernos y otros, compiten (y facilitan) el comercio de créditos y compensaciones de carbono al tiempo que amplían los formas de control de la tierra.

Cientos de empresas multinacionales y más de 130 gobiernos se han comprometido con innumerables objetivos de emisiones 'netas cero', que junto con el impulso de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza explican la fiebre de las Concesiones de Carbono. Esta gran

ola de objetivos climáticos también explica por qué tales concesiones tienden a ser mucho más grandes que la mayoría de los proyectos de carbono forestal promovidos hasta ahora.

En este contexto, por ejemplo, a fines de 2021, la empresa Mayur Renewables PNG (MR), subsidiaria de Mayur Resources (MRL), obtuvo tres Concesiones de Carbono del gobierno de Papúa Nueva Guinea (PNG), cubriendo aproximadamente 800.000 hectáreas de bosque. Estas concesiones tienen un período de acreditación de más de 30 años y, según la empresa, se trata de “proyectos REDD de compensación de carbono basados en la naturaleza”. (1). El objetivo de la compañía es expandirse a 1,4 millones de hectáreas.

MRL, con sede en PNG, tiene como objetivo convertirse en el principal proveedor en la región de “productos de cemento y cal neutros en carbono”, y se supone que estas Concesiones de Carbono convertirán su Proyecto Central de Cemento y Piedra Caliza, cerca de Port Moresby, en un negocio ‘neutro en carbono’. (2)

En diciembre de 2021, VT Carbon Partners otorgó a MR una línea de crédito de 3 millones de dólares estadounidenses. VT Carbon Partners es un fondo de administración conjunta de Viridios Capital y Tribeca Investment Partners. Se lanzó en 2021 con una cartera inicial de 500 millones de dólares australianos (más de 360 millones de dólares estadounidenses) que se aplicará a ‘proyectos basados en la naturaleza’ certificados por Verra. Con estas grandes Concesiones de Carbono y planes de expansión, PNG se convertiría en uno de los productores de créditos de carbono más grandes del mundo.

Durante un seminario web realizado en 2021, el director ejecutivo de Viridios Capital afirmó que “Aquí se puede crear una industria completamente nueva y potencialmente también un nuevo mercado de exportación para PNG. Solo pensando en el requisito de que los países desarrollados mitiguen sus emisiones (...), especialmente los países desarrollados vecinos, como Australia y Nueva Zelanda, que necesitan esas compensaciones. Y eso crearía una industria completamente nueva en PNG, que incluya a las comunidades locales, las cuales necesitarían *volver a capacitarse* en el manejo *adecuado* de los bosques, y también capacitación de la ciencia y la academia en nuevas tecnologías”. (3) (énfasis añadido)

Este CEO debe estar pensando que el manejo *adecuado* de los bosques es aquél en el que el uso del bosque es solo para beneficio de los intereses lucrativos de los inversionistas de las concesiones, y para lo cual las comunidades locales necesitan *volver a ser capacitadas* acerca de cómo deben comportarse, y vivir de manera diferente a su propia forma de coexistir y utilizar el bosque.

De manera similar, aunque con mucha mayor controversia en los medios, en noviembre de 2021, un acuerdo entre el gobierno de Malasia y Hoch Standard Ptd. Ltd., con sede en Singapur, otorgó a la compañía más de dos millones de hectáreas de bosques tropicales como Concesión de Carbono en el estado malasio de Sabah, en la isla de Borneo. El plan era ampliar el proyecto a cuatro millones de hectáreas. Según el acuerdo, las entidades extranjeras tendrían derechos sobre estos bosques durante los próximos 100 a 200 años. Las consultoras internacionales Tierra Australia y Global Nature Capital también participaron en las negociaciones del acuerdo.

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Los medios de difusión así como las organizaciones y grupos de la sociedad civil de Sabah generaron una fuerte atención en el acuerdo, tanto que en febrero de 2022 el Fiscal General del Estado de Sabah emitió un comunicado de prensa en el que describió al ‘Acuerdo de Conservación de la Naturaleza’ como “jurídicamente inválido”. Sin embargo, diez días después, y a pesar de las numerosas imposibilidades técnicas que se han encontrado para firmar este acuerdo, el viceministro principal de Sabah, Jeffrey Kitingan, dijo que “todo está bien” con el Acuerdo. (4)

Una líder indígena de Sabah reflexionó sobre este Acuerdo y sobre la absoluta falta de consideración hacia los grupos indígenas que viven en esos bosques, “¿Se está repitiendo la historia? ¿Todavía no estamos libres ni curados de nuestras historias de la época colonial y de los tiempos de guerra?” (5) En realidad, una pregunta muy válida.

(1) Mayur Resources, Mayur’s forest carbon concessions granted paving pathway to “net zero” projects and opportunity to provide high quality carbon credits for global carbon markets, 2022, <https://www.investi.com.au/api/announcements/mr1/79605f7b-165.pdf>

(2) Pacific News Services, Mayur gets carbon concessions, 2022, <https://pina.com.fj/2022/01/19/mayur-gets-carbon-concessions/>

(3) Mayur Resources Forest Carbon Concessions Investor Webinar, Enero de 2022 <https://www.youtube.com/watch?v=bcFb5GKcBxI>

(4) REDD-Monitor, A question for Jeffrey Kitingan, Sabah’s Deputy Chief Minister: Who owns Lionsgate, the company registered in the British Virgin Islands that owns all the shares in Hoch Standard?, Febrero de 2022, <https://redd-monitor.org/2022/02/25/a-question-for-jeffrey-kitingan-sabahs-deputy-chief-minister-who-owns-lionsgate-the-company-registered-in-the-british-virgin-islands-that-owns-all-the-shares-in-hoch-standard/>

(5) Mongabay, Is colonial history repeating itself with Sabah forest carbon deal?, 2021, <https://news.mongabay.com/2021/12/is-colonial-history-repeating-itself-with-sabah-forest-carbon-deals-big-reveal-commentary/>

Colonización y plantaciones de monocultivos: historias de ‘acaparamientos’ a gran escala

El control de la tierra fue vital para los colonizadores. Era riqueza, control territorial, acceso a ‘recursos’ y mano de obra barata (y a menudo esclava). Separar a los habitantes indígenas de sus territorios fue un componente crucial que persiste hasta hoy. El efecto de esta historia sigue influyendo en el manejo de la tierra así como en los conflictos en torno a ella.

Las políticas sobre bosques y agricultura alrededor del mundo tienden a considerar a la tierra como solo eso: tierra. Cuando se percibe de esta manera, como una simple entidad física, la ‘tierra’ puede ser fácilmente dividida o cartografiada o alquilada a otros para que la utilicen o la consideren como un recurso o bien. Esta concepción de la tierra surgió de varias décadas de procesos de encierro y despojo de tierras, que se llevaron a cabo innegablemente con la fuerza y acompañados de violencia. El objetivo principal era controlar la ‘tierra’ controlar la ‘tierra’.

Actualmente, la mayoría de la tierra del mundo está sujeta a algún tipo de régimen de concesión (ya sea privada o pública) para regular su acceso, control y/o propiedad. Las concesiones han sido una de las principales formas de organizar la tierra, los bosques y los ‘recursos’ desde la época colonial hasta el capitalismo moderno, otorgando a determinados actores el uso legal o control sobre tierras específicas y marginando a otros. Junto con la Biblia, los colonizadores impusieron una cosmovisión en la que la ‘tierra’ estaba separada del resto de la ‘naturaleza’, incluidos sus habitantes.

En consecuencia, muchas de las resistencias contra la imposición de concesiones, también han resistido la imposición de esta concepción eurocéntrica de ‘tierra’, que está alineada con los intereses de la élite.

Esta concepción de ‘tierra’ ha distorsionado y socavado otros conceptos e interpretaciones del espacio vital. En las tierras altas de Sulawesi, Indonesia, por ejemplo, no existe una palabra para ‘tierra’ en la lengua de los pueblos. Hay una palabra para ‘suelo’ y varias expresiones para bosques que expresan la *relación* de las personas con él. No existe una categoría abstracta como ‘tierra’. (1) Y el concepto de ‘tierra’ no es el único. Durante una reunión con una comunidad indígena Wixárika en Jalisco, México, en 2016, la investigadora y activista Silvia Ribeiro se dio cuenta de que la gente estaba usando el idioma español para referirse a conceptos como ‘planta’ y ‘animal’. Un miembro de la comunidad le explicó: “No tenemos una palabra para todos los animales que no nos incluya a nosotros, ni para todas las plantas sin nosotros; como si todo fuera uno y nosotros no estuviéramos incluidos”. Cada animal, planta y ser vivo, al igual que cada montaña, río, camino e incluso roca, tiene un nombre; porque todos son sujetos, parte de un mismo continuum de seres que conforman la comunidad de un territorio. (2)

Concesiones por despojo: el control de la tierra para lucrar

El control de las tierras y los ‘recursos’ fue vital para los colonizadores; fue una estrategia para acumular mayor riqueza, influencia territorial, acceso estratégico a los ‘recursos’ y a mano de obra barata (y frecuentemente esclava), lo que permitió a los imperios prosperar. Desplazaron, utilizaron y/o erradicaron por la fuerza a poblaciones indígenas para poder tener acceso a sus tierras. Esta separación de los Pueblos Indígenas de sus territorios y/o de su autonomía sobre sus territorios fue un componente crucial de la colonización; algo que persiste en las estrategias de conservación contemporáneas, así como en las iniciativas de compensación de carbono forestal, como es el caso de REDD+.

Las formas en que los colonizadores impusieron su control sobre la tierra variaron de una colonia a otra, o diferían por el tipo de recurso que les interesaba, según la geografía de la colonia. También cambiaron a menudo durante el período colonial. (3) A raíz del acaparamiento de tierras coloniales, las empresas y los individuos adinerados asociados con los colonizadores se apropiaron de enormes extensiones de tierra y establecieron sus operaciones comerciales. (4)

En el **sudeste asiático**, por ejemplo, los colonizadores europeos fueron quienes establecieron las concesiones de plantaciones a gran escala en toda la región para expandir y consolidar su control territorial. Esto incluyó la pacificación de disturbios en las zonas rurales mediante la imposición de nuevos estados de control y la creación de nuevas fuentes de acumulación de capital con plantaciones de caucho, café, té, caña de azúcar y coco. Los gobiernos coloniales de la región apoyaron el establecimiento de las plantaciones de caucho al otorgar préstamos a promotores privados, como el ‘Programa de préstamos para plantadores’ de Malasia de 1904, y al otorgar concesiones de tierras a precios muy bajos. En Malasia peninsular, se les facilitaron zonas consideradas como ‘tierras baldías’ –aunque ocupadas y utilizadas por habitantes indígenas– a inversionistas del caucho. En la Indochina francesa, donde surgió la industria del caucho en la década de 1920, las concesiones prácticamente fueron repartidas entre los inversionistas, lo que llevó a amplias adquisiciones de tierras que provocaron enfrentamientos con los Pueblos Indígenas (5).

La Ley de Tierras Agrarias que el gobierno colonial holandés promulgó en 1870 para lo que se conoce actualmente como Indonesia, permitió que empresas y élites extranjeras ocuparan enormes extensiones de tierra. Esta Ley contiene la disposición de que “todas las tierras que no se posean en dominio probado, se considerarán de dominio del Estado”. En consecuencia, los colonizadores holandeses reclamaron la propiedad de la mayor parte de la tierra de su colonia mientras debilitaban el control de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras ancestrales. Esto condujo a un aumento no solo de las inversiones holandesas sino también británicas, norteamericanas y franco-belgas, entre otras. Algunas empresas tuvieron explotaciones de caucho en la zona por un total de hasta 100.000 hectáreas. Esto confinó violentamente a los habitantes indígenas en superficies de tierra cada vez más pequeñas. El efecto de esta historia se sufre hasta hoy en día, ya que continúa influyendo en el carácter de la tenencia de la tierra de la mayor parte de Indonesia: el control desproporcionado del Estado sobre la tierra sigue siendo una desgracia para la política y la economía de Indonesia. (6)

Los colonizadores británicos establecieron un marco similar en Malasia, centrándose principalmente en economías basadas en las plantaciones, que servían a los intereses coloniales a largo plazo. Como argumenta la investigadora Amrita Malhi, “los ‘modos consuetudinarios de regulación’ fueron reemplazados por ‘un régimen de propiedad’ y se estableció el Estado colonial como árbitro exclusivo y centralizado de la tierra y su distribución”. (7)

Sin embargo, los colonizadores británicos no solo buscaron consolidar su poder a través del control de la tierra sino también de la reubicación de la población desposeída en espacios más reducidos. Estas nuevas concesiones de ocupación –ya fuera en términos de reservas de bosques creadas para estudiar especies de árboles y otros ‘recursos’ productivos, haciendas de plantaciones de monocultivos o aldeas recién creadas para los desplazados– dividieron los entornos ‘naturales’ y ‘sociales’ de Malasia, permitiendo generar más ganancias con ‘la tierra’. (8) En 1902, un capitalista escocés, William Sime, y un banquero inglés, Henry Darby, fundaron una firma comercial en Malaca con la participación de empresarios locales chinos: Sime-Darby, la empresa que en 1910 introdujo la palma aceitera en la Malasia peninsular (9). Hoy, esta empresa controla más de 620.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en Malasia e Indonesia.

Otro ejemplo es cómo la colonización británica en las Américas utilizó el sistema de plantaciones como instrumento de control de la tierra y el poder político. La tierra donde se establecieron las plantaciones en los territorios de América del Norte y el Caribe fue robada a los Pueblos Indígenas mediante tratados cancelados, ignorados y fraudulentos, o directamente por medio de la violencia bruta. El sistema de plantaciones de monocultivos comerciales representó uno de los primeros ensayos capitalistas de los colonizadores, quienes trajeron por la fuerza y vendieron a millones de africanos como esclavos para trabajar en estas plantaciones.

Como muestran estos ejemplos, la categoría de las concesiones de tierra debe entenderse en su relación con las historias de colonización, despojo, conflictos y poder.

Estos eventos históricos llevaron a transformaciones dramáticas en los bosques y sus habitantes, transformaciones que tienen y seguirán teniendo efectos devastadores y duraderos. El sistema colonial que se impuso sobre cómo percibir, comprender y utilizar la ‘tierra’ continúa dominando los sistemas de conocimiento occidentales. En cierto modo, las concesiones, en particular las relacionadas con las plantaciones industriales, aún hoy representan espacios donde la tierra, los medios de subsistencia, la ley y el gobierno son monopolizados y colonizados por el sistema colonial dominante de plantaciones (10).

Concesiones en África: violencia, cooptación y racismo

En África, los colonizadores europeos también otorgaron vastas concesiones de tierras a empresas privadas. De hecho, todas las principales potencias coloniales en el continente utilizaron esa estrategia para expandir su control territorial. A mediados de la década de 1870, los colonizadores europeos habían realizado ocupaciones en la mayor parte de África. Podría decirse que el caso más notorio fue el gobierno belga del rey Leopoldo II con el ‘Estado Libre del Congo’, la cual fue su colonia privada durante más de una década (1895-1908).

Dentro de África existían concesiones en colonias francesas, británicas, belgas, alemanas y portuguesas (lo que incluye lo que hoy se conoce como Angola, Botsuana, República Centroafricana, Camerún, Chad, República Democrática del Congo, Gabón, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, República de Congo, Tanzania, Zambia y Zimbabue). Si bien la forma que tomaron las concesiones varió ampliamente, un elemento en común fue el propósito principal de los dueños de las concesiones de extraer ‘recursos’ de la manera más barata posible. Se les asignaron poderes que normalmente se asocian con los gobiernos, como el monopolio de la violencia y la capacidad de cobrar impuestos. Algunas colonias se administraron totalmente como concesiones. Por ejemplo, toda Rhodesia (actual Zimbabue) fue otorgada como concesión a la Compañía Británica de Sudáfrica. Además, las concesiones a menudo se otorgaron en áreas ricas en ‘recursos’. (11)

La explotación laboral extrema, junto con la coerción y la violencia, fue una condición básica para que estas empresas pudieran obtener ganancias exorbitantes con las concesiones.

En el África subsahariana, las concesiones a empresas privadas se caracterizaron por la cooptación de las instituciones locales, el reemplazo de los líderes que no cooperaban por líderes obedientes, y la creación de linajes de gobernantes. Con estas tácticas, las concesiones establecieron una serie de hombres fuertes que a menudo aún continúan dominando la política de estos pueblos en la actualidad. Éste es especialmente el caso en los lugares donde se establecieron concesiones para plantaciones de monocultivos. Los líderes que no obedecían o los jefes rebeldes solían ser apresados, reemplazados, degradados descaradamente o asesinados. La obediencia hacia los líderes cooptados se logró a través de la violencia extrema (12). Como la presencia europea se limitó principalmente a las respectivas capitales y ciudades costeras, su régimen a través de jefes e instituciones cooptados caracterizó la mayor parte del continente.

Mientras destruían las instituciones locales, el liderazgo y el tejido social, los europeos emplearon una variedad de estrategias para oprimir las numerosas luchas de resistencia y rebeliones. Entre ellas están los sistemas de trabajo forzado, impuestos que llegaban a grados de extorsión sobre los campesinos, sometimientos, y masacres en masa. Todas estas conllevaron profundas consecuencias en la política y las organizaciones actuales.

En Sierra Leona, por ejemplo, los jefes supremos, los jefes subordinados y los caudillos gobernaron el interior del país durante la era colonial y eran responsables únicamente ante la administración colonial en la capital, Freetown. El poder de los caciques perduró e incluso se fortaleció después de la independencia. Los jefes supremos pasaron a formar parte de la administración estatal, lo que a menudo los puso en conflicto con su papel como jefes en los sistemas de gobierno tradicionales. A lo largo del período posterior a la independencia, estos jefes controlaron la tierra, resolvieron disputas, gravaron la producción, ofrecieron algunos bienes públicos y asignaron votos a sus candidatos preferidos en las elecciones nacionales. (13)

Muchas naciones recién independizadas de África, en gran medida todavía imbuidas de los sistemas coloniales, decidieron nacionalizar su tierra. Los gobiernos se apropiaron de los derechos de uso de estas tierras y asignaron vastas extensiones a grandes proyectos del agronegocio en manos de empresas públicas o privadas, e incluso individuos. Millones de hectáreas de las poblaciones locales fueron confiscadas legalmente (una vez más).

Al respecto, el activista social y ambiental y defensor de los derechos humanos Nasako Besingi, explicó en una entrevista del WRM realizada en 2018, que “Es erróneo que un gobierno reclame la propiedad de la tierra, ignorando los derechos territoriales de las comunidades. De hecho, el problema con las ordenanzas territoriales de África es que fueron formuladas con la ayuda de los amos colonialistas, quienes, sin el consentimiento de la población, entregaron el territorio a los presidentes, que no fueron elegidos por la población sino más a menudo elegidos por los colonizadores para servir a sus intereses a largo plazo (14)

La frase ‘toda la tierra pertenece al Estado’, agregó Besingi, no implica que la tierra sea propiedad del gobierno, sino más bien de toda la población que vive dentro del territorio de un Estado. Un gobierno se describe mejor como una agencia ante la cual se formula, expresa y lleva a cabo la *voluntad* del Estado, y a través de la cual se determinan y regulan las políticas comunes en términos de desarrollo político, económico y social. El cumplimiento de esas tareas no se traduce en derechos de propiedad estatal sobre la tierra y los recursos naturales del Estado.

“Desde que empecé a participar en movimientos y organizaciones de derechos comunitarios sobre la tierra en Camerún y en otros países”, declaró Besingi, “ninguna de las comunidades con las que me he reunido aceptó la idea de que la tierra es propiedad del gobierno. Ellas afirman que la tierra pertenece a sus comunidades y es un patrimonio ancestral. Ninguna de las comunidades con las que he trabajado está de acuerdo con la presencia de empresas multinacionales en sus tierras, alegando que las empresas se establecieron mediante el uso de la fuerza coercitiva”.

Categorizar la tierra y los ‘recursos’ como concesiones es lo que ha permitido la expansión del sistema capitalista: concesiones para extracción de combustibles fósiles, plantaciones de monocultivos, actividades mineras, infraestructura corporativa a gran escala, etc. Incluso las concesiones del ‘ámbito público’, como las destinadas a la ‘conservación’, están entrando en la misma lógica capitalista de acumulación y quitándoles el control a las poblaciones locales.

El establecimiento de concesiones, de hecho, ha sido un intento de borrar la poderosa resistencia y supervivencia de quienes vivían en esas tierras y bosques antes de su imposición. Cuando se otorga una concesión a una empresa u ONG, se invisibilizan las historias, los recuerdos y el entramado de vida que existió o continúa existiendo en esa ‘tierra’. Las concesiones hacen creer que los legítimos propietarios o usuarios *no* son quienes originalmente ocuparon, protegieron y trabajaron esos territorios. Pero como señaló un anciano de Gitksan en una reunión con funcionarios del gobierno canadiense por su reclamo de propiedad del territorio de Gitksan: “Si ésta es su tierra, ¿dónde están sus historias?” (15)

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Como señaló Besingi, el aspecto clave más importante de las luchas de resistencia de las comunidades en África es “vencer el miedo y la ignorancia inculcados deliberadamente en la población por las administraciones coloniales y poscoloniales... Teniendo en cuenta que los movimientos de larga duración son aquellos que se construyen desde la base y no desde el exterior, la resistencia solo puede ser fuerte cuando está ligada a las preocupaciones de la comunidad”.

En la actualidad, los conflictos por la tierra y la resistencia a la imposición de concesiones se insertan en luchas históricas mucho más profundas en torno a interpretaciones opuestas de lo que significa ‘tierra’ y ‘naturaleza’. Las comunidades que reclaman autonomía y control sobre sus tierras y vidas son parte de esta re-ocupación.

Secretariado Internacional del WRM

- (1) Edge Effects, What is Land? A conversation with Tania Murray Li, Rafael Marquese, & Monica White, 2019, <https://edgeeffects.net/land-plantationocene/>
- (2) Boletín del WRM, diciembre de 2016, De las compensaciones por biodiversidad a la ingeniería de ecosistemas: nuevas amenazas a comunidades y territorios, <https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/de-las-compensaciones-por-biodiversidad-a-la-ingenieria-de-ecosistemas-nuevas-amenazas-a-comunidades-y-territorios>
- (3) Nancy Lee Peluso & Christian Lund (2011) New frontiers of land control: Introduction, *Journal of Peasant Studies*, 38:4, 667-681, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150.2011.607692>
- (4) Roudart, Laurence and Marcel Mazoyer (2015) “Large-Scale Land Acquisitions: A Historical Perspective” in *Large-Scale Land Acquisitions: Focus on South-East Asia*, International Development Policy, <https://journals.openedition.org/poldev/2088>
- (5) Miles Kenney-Lazar and Noboru Ishikawa, *Mega-Plantations in Southeast Asia: Landscapes of Displacement*, 2019, https://www.researchgate.net/publication/335224850_Mega-Plantations_in_Southeast_Asia_Landscapes_of_Displacement
- (6) Inside Indonesia, A 150-year old obstacle to land rights, 2020, <https://www.insideindonesia.org/a-150-year-old-obstacle-to-land-rights>
- (7) Amrita Malhi (2011): Making spaces, making subjects: land, enclosure and Islam in colonial Malaya, *Journal of Peasant Studies*, 38:4, 727-746, https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/56750/2/01_Malhi_Making_spaces%2c_making_2011.pdf
- (8) David Baillargeon, Spaces of occupation: Colonial enclosure and confinement in British Malaya, 2021, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305748821000487>
- (9) Robert Fitzgerald, *The Rise of the Global Company. Multinationals and the Making of the Modern World*, 2016, Cambridge University Press
- (10) Edge Effects, What is Land? A conversation with Tania Murray Li, Rafael Marquese, & Monica White, 2019, <https://edgeeffects.net/land-plantationocene/>
- (11) Sara Lowes and Eduardo Montero, Concessions, Violence, and Indirect Rule: Evidence from the Congo Free State, 2020, https://scholar.harvard.edu/files/lowes_montero_rubber.pdf
- (12) Idem (11)
- (13) VoxDev, Historical legacies and African development, 2019, <https://voxdev.org/topic/institutions-political-economy/historical-legacies-and-african-development>
- (14) Boletín del WRM, diciembre de 2018, Una reflexión desde África: hay que vencer el miedo para construir movimientos más fuertes, <https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/una-reflexion-desde-africa-hay-que-vencer-el-miedo-para-construir-movimientos-mas-fuertes>
- (15) J. Edward Chamberlin, *If This Is Your Land, Where Are Your Stories?*, Penguin Random House Canada, <https://www.penguinrandomhouse.ca/books/25904/if-this-is-your-land-where-are-your-stories-by-j-edward-chamberlin/9780676974928/excerpt>

Colonialismo forestal en Tailandia

Las empresas británicas no solo controlaban el 80 por ciento de las ‘tierras madereras’ establecidas en Tailandia, sino que también influyeron en la creación del Departamento Forestal Real, que llegó a tener poder absoluto sobre los bosques de la nación. Los acaparamiento masivos de tierra y varias leyes coloniales convirtieron la mitad del territorio del país en una colonia del estado central.

Un sistema de concesiones del siglo XIX

En 1874, durante la era del colonialismo europeo, la monarquía Siam, con sede en Bangkok, anexó Chiang Mai en lo que ahora es el norte de Tailandia como su propia colonia. En virtud del Tratado de Chiang Mai, en 1883 se impuso un modelo de concesión forestal siamés que permitió a las empresas europeas el acceso directo a grandes extensiones de árboles de teca de la región, y gran parte de las ganancias se repartieron con la monarquía en Bangkok.

Entre 1889 y 1896, las empresas Bombay Burmah Company, British Borneo Company, Siam Forest Company Ltd. y Louis T. Leonowens Ltd., del Reino Unido, y East Asiatic Co. de Dinamarca, comenzaron intensivamente con la extracción maderera. (1) Las empresas británicas controlaban el 80 por ciento de las llamadas ‘tierras madereras’ establecidas. (2) También influyeron en la creación del Departamento Forestal Real en 1896, que llegó a tener poder absoluto sobre las actividades forestales de la nación. Un ciudadano británico fue jefe del Departamento durante los siguientes 28 años y las actividades madereras británicas se extendieron por siete décadas.

Colonias forestales

La Ley de Preservación Forestal, aprobada en 1913, fue la primera ley forestal del país por la cual los bosques quedaron definidos en gran medida en términos de ocupación colonial. Cualquier tierra sin títulos de propiedad otorgados por la realeza que permitieran el cultivo o la construcción de viviendas se consideraba bajo el control del Departamento Forestal. En consecuencia, el Departamento pudo acumular grandes extensiones de tierra para concesiones madereras, en las cuales ya vivían agricultores que también dependían de los bosques pero que no contaban con la documentación.

La Ley de Protección y Preservación Forestal de 1938 mantuvo el mismo espíritu, al definir los bosques como tierras ‘baldías’ o desocupadas dentro del dominio público. De manera similar, la Ley Forestal de 1941 consideraba a los bosques como tierras que “todavía no habían sido adquiridas por nadie en virtud de la Ley de Tierras”. Estas leyes convirtieron efectivamente la mitad del territorio del país en una colonia forestal del Estado central, anexando tierras comunitarias, bosques, campos y territorios de pueblos por igual.

125 años de explotación forestal

Las actividades forestales y la ciencia forestal en Tailandia surgen de la historia de la tala de árboles de teca en el norte del país, desde 1840 en adelante. En los centros gubernamentales del norte, como Chiang Mai, Lampoon y Lampang, originalmente los nobles concedieron a varias empresas chinas, birmanas y tailandesas de la etnia yai (del sudeste asiático) permiso para extraer teca a cambio de una tarifa. Luego, en 1855, el Estado central de Siam firmó el acuerdo comercial conocido como Tratado de Bowring con Gran Bretaña. Esto permitió a los británicos, así como a las nacionalidades étnicas bajo dominio británico, entre ellas los birmanos, los tailandeses yai y los mon, expandir la extracción de teca en la región. Fue así que la British Borneo Company ya estaba en escena en 1864 como compradora de madera, incluso antes de la anexión formal de Chiang Mai como colonia siamesa, diez años después.

Fue recién en 1954-55 que las vastas concesiones madereras otorgadas a extranjeros expiraron, las que fueron entregadas a la Organización de Industrias Forestales de Tailandia y a empresas madereras provinciales. En ese momento, los rodales maduros de teca nativa del país en gran parte estaban agotados y los concesionarios recurrían a otras especies comerciales. En las décadas siguientes, las tasas de deforestación del país aumentaron hasta convertirse en unas de las más altas del mundo, impulsadas en gran medida por la expansión de la agricultura industrial, pero también por la explotación maderera bajo el sistema de concesión así como por la construcción de represas, las cuales a menudo abrieron nuevas zonas para el cultivo. La extracción maderera tuvo un gran impacto en los bosques que habían sido conservados y mantenidos por las comunidades para su propio uso, situación que estimuló la resistencia en el norte y en otras partes del país y motivó un creciente movimiento ecologista en Tailandia. En 1989 finalmente se prohibió la extracción maderera.

Una conservación autoritaria

A medida que en la década de 1980 se desvanecía la era de la explotación maderera, el foco de la entidad forestal se desplazó hacia las plantaciones comerciales industriales de árboles y la conservación de bosques. Pero el modelo interno de colonialismo se mantuvo, acompañado de una creciente resistencia local a la hegemonía estatal sobre las tierras, incluidos los bosques, utilizados por millones de comuneros.

Aunque a principios de la década de 1960 el gobierno tailandés promulgó dos leyes de conservación, la Ley de Protección y Preservación de la Vida Silvestre y la Ley de Parques Nacionales, fue recién después de prohibir la extracción maderera, 93 años después de que se estableciera el Departamento Forestal, que el pensamiento conservacionista oficial realmente despegó. Las zonas de conservación se expandieron poco a poco, invadiendo especialmente a las comunidades minoritarias residentes en las zonas altas, primero tomando el control de las antiguas concesiones madereras y luego ampliándose aún más conforme a la recomendación de los 'expertos' de la ONU-FAO de que Tailandia debería tener no menos del 40 por ciento de cobertura forestal. Como resultado, los comuneros han sido privados de acceder a recursos necesarios, se han establecido unidades gubernamentales cerca de las comunidades para limitarles el uso de los bosques y numerosas personas fueron desalojadas de sus tierras. Los conflictos violentos entre los comuneros rurales y el Estado aumentaron.

Las últimas enmiendas a la ley forestal tailandesa, luego del golpe militar de 2014 que instaló al general retirado del ejército Prayut Chan-O-Cha en la posición de Primer Ministro, incluyen la cuarta Ley de Reservas Forestales Nacionales de 2016, la Ley de Parques Nacionales de 2019 y la Ley de Preservación y Protección de la Vida Silvestre de 2019. Las infracciones conllevan penas de 1 a 20 años de prisión (3) y multas de entre 600 y 60.000 dólares estadounidenses. En los últimos años también se han presentado casos legales contra comuneros por daños a los ‘recursos naturales’ y por contribuir al calentamiento global. Aquellos que residen sobre tierras de bosques estatales han sido injustamente demandados por daños y perjuicios con multas enormes que no tienen forma de pagar.

Las nuevas leyes aumentaron considerablemente el poder de los funcionarios para realizar arrestos y confiscar propiedades en zonas de Parques Nacionales. Para poder permanecer en sus tierras sin amenazas de prisión o multas, los miembros de las comunidades deben obtener permisos de residencia que se conceden con un límite de 20 años (4), así como un permiso especial para usar los bosques. De hecho, en muchos sentidos, las Reservas Forestales Nacionales y los Parques Nacionales ahora se asemejan a territorios bajo ley marcial. Hay fuertes ecos de la Ley Marcial de 1914 promulgada durante la Primera Guerra Mundial, que otorgó a los oficiales militares un poder superior al de las autoridades civiles y que les permitió registrar personas, vehículos o edificios a voluntad, emitir prohibiciones, confiscar bienes, construir fuertes, expulsar a la población, y destruir o modificar el terreno o quemar casas para negar al enemigo cualquier ventaja en la batalla.

A partir de los complejos procesos de colonización de las tierras boscosas del país, se impusieron visiones racistas y opresivas sobre los bosques y sus habitantes. Esta mentalidad colonial ha seguido influyendo en las decisiones y la formulación de políticas nacionales y perjudicando gravemente a las comunidades de los bosques, a las que en gran medida se las considera falsamente como intrusas o perjudiciales para los bosques. Esto a su vez se manifiesta con extrema violencia y discriminación hacia estas comunidades y sus medios de vida y prácticas culturales tradicionales.

A pesar de las difíciles circunstancias, las comunidades de los bosques continúan desafiando y luchando contra este contexto opresivo. A principios de 2021, el pueblo indígena Karen de Bang Kloï regresó a su hogar ancestral en los bosques de Kaeng Krachan, después de años de despojo debido a la creación del Parque Nacional Kaeng Krachan. Treinta personas fueron detenidas por “invadir el parque nacional”. (5) Se les prohíbe regresar o traspasar el Parque sin permiso. Si aún desobedecen, serán retirados bajo fianza y enviados a prisión de inmediato.

Es claro que la lucha del Pueblo Karen por recuperar su territorio no se limita solamente a la tierra, sino también a recuperar su identidad, cultura, dignidad y vida, a partir de una historia de colonización y ocupación.

Pornpana Kuaycharoen
Land Watch Thai

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

- (1) Tesis de Maestría, "*Development of teak logging in Thailand 1896-1960*", (Desarrollo de la tala de teca en Tailandia 1896-1960) Salarirat Dolarom, Universidad de Silpakorn, Tailandia, 1985
- (2) Ídem (1)
- (3) Sección 30 bajo la Ley Nacional de Bosques en Reserva B.E. 2019 y Sección 41 bajo la Ley de Parques Nacionales 2019. Ver la Ley de Parques Nacionales 2019, Versión en inglés aquí. <http://115.31.166.198/DNP/FileSystem/download?uuid=69d260ae-df67-4345-93ee-288c88a3bc6d.pdf>
- (4) Sección 64 bajo la Ley Nacional de Bosques en Reserva B.E. 2019
- (5) Tailandia. La imposición de los parques nacionales: la lucha del pueblo Karen por sus bosques y su supervivencia, Boletín del WRM 254. Marzo de 2021, <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/tailandia-la-imposicion-de-los-parques-nacionales-la-lucha-del-pueblo-karen-por-sus-bosques-y-su-supervivencia/> ; y ¡ALERTA! Comunidades indígenas Karen están en peligro después de regresar a su territorio ancestral en Tailandia, <https://wrm.org.uy/es/acciones-y-campanas/alerta-las-comunidades-indigenas-karen-estan-en-peligro-despues-de-regresar-a-su-territorio-ancestral-en-tailandia/>

Concesiones Forestales, un concepto colonial

Lo que la historiografía llama de expansión civilizatoria o del capital es, en realidad, la invasión y desterritorialización de pueblos y comunidades con una gran violencia epistémica y territorial. Las concesiones se están haciendo sobre áreas que no son vacíos demográficos; un concepto colonial que ignora que estas zonas están ocupadas desde hace milenios.

*A los Pueblos Mapuche,
quienes están retomando sus territorios*

Recientemente, las comunidades campesinas de las sabanas brasileñas, conocidas como comunidades tradicionales de *Fundo e Fecho de Pasto*, pasaron a cuestionar el instrumento legal de ‘concesiones de derecho real de uso’ que propone el Estado brasileño para reglamentar las tierras que ocupan de forma ancestral. Se trata de un instrumento a través del cual el Estado concede el derecho de uso durante un periodo de tiempo determinado, pero mantiene la propiedad del terreno. Este instrumento es utilizado en situaciones en las que se reconoce el interés social de la tierra, incluida la dimensión medioambiental. En el caso concreto de las comunidades de *Fundo y Fecho de Pasto*, se encuentran el uso común de la tierra y de todo lo que ello implica –el agua, la fauna y la flora incluidas– por parte de estos pueblos. Es habitual que en estas unidades territoriales tradicionales las familias dispongan de terrenos de uso unifamiliar junto a sus viviendas y, en la parte posterior de las mismas, de una zona de uso común destinada a la extracción de frutos y madera o como pastizal común, a las que denominan ‘*fundo de pasto*’ (pastizal trasero) o, en el caso de tierras de uso común que se utilizan para los mismos fines pero están alejadas de sus viviendas, en zonas no contiguas, las denominan ‘*fecho de pasto*’ (pastizal aledaño).

El cuestionamiento que algunas de estas comunidades están planteando sobre el uso de este instrumento legal llama la atención por tocar el núcleo del concepto de ‘Concesión’, una expresión que se refiere a “la acción o efecto de conceder, poner a disposición, hacer disponible; consentimiento, permiso”. Este cuestionamiento se basa en una condición de origen, es decir, su existencia previa al poder del Estado que pretende ser el poder concedente. En efecto, las comunidades de *Fundo o Fecho de pasto* constituyen un espacio territorial de uso común, como un modo de vida, por lo que se puede caracterizar como un derecho consuetudinario, anterior al Estado y no sólo cronológicamente, sino por tratarse de prácticas tradicionales que siguen en acción/actuales.

En realidad, lo que reclaman como grupo social es lo mismo que el derecho internacional reconoce a los Estados como *uti possidetis de iuris*, principio según el cual quienes ocupan efectivamente un territorio tienen derecho a él. Con ello, actualizan un debate teórico-político que los Pueblos Indígenas ya venían planteando acerca de sus territorios, cuyos orígenes son

anteriores a los Estados de los actuales países en los que viven. Así, estas comunidades campesinas tradicionales se unen a los Pueblos Indígenas y a las comunidades *quilombolas/cimarronas/palenqueras* cuyos derechos están reconocidos por el Convenio 169 de la OIT de 1989, afirmando una tendencia reciente en el derecho internacional, como se ha visto con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.

Para comprender la profunda dimensión de este proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos a los territorios que ya ocupan, cabe señalar que se trata de procesos que no se circunscriben a estos pueblos y poblaciones tradicionales, dado que ese reconocimiento está íntimamente relacionado con los procesos de descolonización que siguió tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Asia y África (1), y también frente a la masacre cometida contra el pueblo judío en los campos de concentración nazis. Desde entonces, se ha reconocido el derecho de las minorías étnicas y raciales en Estados que hasta ahora se consideraban uninacionales.

Más recientemente, los Pueblos Indígenas de las Américas (2) recuperaron su protagonismo e incluso cuestionaron la exclusividad de designar a la subregión como América Latina, expresión que ignora la existencia de pueblos que no tienen origen latino y que hoy designan a la subregión con su propio nombre: *Abya Yala* (3). Bolivia y Ecuador se declararon oficialmente Estados Plurinacionales en sus Cartas Magnas, en 2010 y 2008 respectivamente, mientras que otros Estados reconocen los derechos de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Comunidades Tradicionales en sus territorios, incluso dentro de los Estados, por lo que ya no son exclusivamente uninacionales.

Las luchas de los pueblos y comunidades tradicionales replantean el cuestionamiento del carácter colonial en su continuidad-discontinuidad, ya que "el fin del colonialismo no significó el fin de la colonialidad" (4). Al fin y al cabo, el modo colonial de pensar/actuar y sentir –es decir, la colonialidad – ha sobrevivido al final del colonialismo como un periodo histórico determinado. Esto se evidencia en la permanencia de conceptos coloniales como ‘concesión’, ‘reserva’ o ‘desarrollo’ que aún persisten en los Estados y organismos internacionales para referirse a las poblaciones tradicionales o a las concesiones sobre los territorios de bosque. Se olvidan de que estos grupos/etnias/pueblos/clases reclaman el reconocimiento de sus territorios y alternativas al desarrollo y no de desarrollo, en definitiva, al buen vivir (*Ubuntu, Sumaq Qamaña o Sumak Kausay*) (5), planteando otros horizontes de sentido político para la vida.

Y lo hacen aportando al debate un tiempo inmemorial/ancestral que pone en cuestión el tiempo colonial y su horizonte de acumulación de capital [siempre] a corto plazo.

El tiempo colonial no es el tiempo de nuestros bosques y territorios habitados desde el Pleistoceno, hace más de 19.000 años, como en la Formación Cultural Chiribiquete en la actual Amazonia colombiana. ¿Cómo se puede hacer una ‘concesión forestal’ ignorando, por ejemplo, la ‘selva tropical cultural húmeda’, como se ha llamado a la selva amazónica? La Amazonía cuenta con unos 39.000 millones de árboles agrupados en 16.000 especies, de las cuales sólo 227 (es decir, el 1,4%) representan la mitad del número total de árboles del bioma. Estas especies se conocen como hiperdominantes. Entre las especies hiperdominantes, hay 85 con poblaciones

domesticadas/manejadas cuya dispersión y concentración posiblemente fueron influenciadas por la acción humana en el pasado. Se sabe que la palmera de azaí ha sido manejada desde hace por lo menos 2000 años A.P. en zonas de la selva amazónica brasileña y colombiana en las que hay formación de suelos con tierra negra, que son suelos antropogénicos. Lo mismo ocurre desde hace 11.000 años con el milpesillo (*Oenocarpus bacaba*), el bataua (*Oenocarpus bataua*), el murumuru (*Astrocaryum murumuru*), el aguaje (*Mauritia flexuosa*), el inayuga o anajá (*Attalea maripa*) y la tucuma (*Astrocaryum aculeatum*).

Los estudios clásicos demuestran que las prácticas agrupadas en la 'agroforestería' señalan que la hiperdominancia en la selva amazónica se dio, al menos parcialmente, en un proceso de co-evolución entre los Pueblos Indígenas, las plantas y los animales desde el comienzo del Holoceno. Y no sólo en la Amazonía, como se ha identificado en 76 familias y 240 especies de plantas a partir de estudios de semillas, madera, fitolitos, granos de almidón y de polen conservados en sedimentos y artefactos arqueológicos en Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guinea Francesa, Honduras, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Como se puede ver, estamos ante otro paradigma, distinto del *eeuu*rocentrismo y que no separa la naturaleza de la cultura ni la naturaleza de la sociedad. Los bosques no son espacios vacíos de ocupación, de cultura. Las concesiones de bosque y de otro tipo (de tierras o para la minería, por ejemplo) se están otorgando en zonas que no son vacíos demográficos, un concepto colonial que ignora el hecho de que estas zonas están ocupadas desde hace milenios, como hemos visto. Por lo tanto, lo que en la historiografía se suele llamar cándidamente expansión de la civilización o del capital es, en realidad, la invasión y desterritorialización de pueblos y comunidades con una gran violencia epistémica y territorial (ecocidio y terricidio).

Esta tensión conflictiva que se viene gestando desde 1492 en *Abya Yala* / América toma hoy proporciones dramáticas en la lucha de los pueblos del Wallmapu en el sur del continente, donde el Pueblo Indígena Mapuche vienen retomando sus territorios que les fueron violentamente despojados sin su concesión, si se me permite utilizar de forma inapropiada el término mencionado hasta ahora. Todo parece indicar que se abren nuevos tiempos cuando vemos que el 27 de enero de 2022 la Asamblea Constituyente chilena, bajo el liderazgo de una mujer indígena mapuche, propuso que el país sea designado como un Estado Plurinacional e Intercultural.

Carlos Walter Porto-Gonçalves,

Coordinador de LEMTO -Laboratorio de Estudios de Movimientos Sociales y Territorios- de la Universidade Federal Fluminense y profesor del Programa de Posgrado Interdisciplinario en Ciencias Humanas de la Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil.

(1) Consideremos que los procesos de independencia de las antiguas metrópolis coloniales europeas ya habían sucedido en las Américas desde 1776, en Estados Unidos, y en 1804, en Haití, y luego en otros países del continente.

(2) Se puede afirmar que la resistencia de los pueblos originarios se produjo desde el primer momento del proceso de invasión/conquista colonial. Sin embargo, cabe destacar la gran rebelión que se produjo en el mundo andino bajo el mando de Túpac

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Amaru, Túpac Katari y Bartolina Sisa, en 1781, la cual prácticamente frenó la explotación de la plata y contribuyó para el inicio de los procesos de independencia liderados por las élites criollas.

(3) PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter (2006). Abya Yala. En SADER, Emir y Jikings, Ivana. Enciclopedia Latinoamericana. Boitempo, São Paulo y Madrid.

(4) QUIJANO, Anibal (2005), "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina". En: Lander, E. (org.), *La colonialidad del conocimiento: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. CLACSO. Buenos Aires.

(5) Ubuntu, entre los bantúes en África, Sumaq Qamaña, entre los aymaras, y Sumak Kausay, entre los quechuas en los Andes, son conceptos/cosmogonías con los cuales los pueblos han denominado sus propios modos de vida, rechazando su identificación desde conceptos de fuerte contenido etnocéntrico como el de desarrollo.

Un siglo de agrocolonialismo en la RD del Congo

Muchas concesiones para plantaciones de palma aceitera en África Occidental y Central se crearon sobre tierras robadas a las comunidades durante las ocupaciones coloniales. Tal es el caso en la RDC, donde la empresa Unilever inició su imperio de aceite de palma. Hoy estas plantaciones siguen siendo lugares de pobreza y violencia constantes. Es hora de poner fin al modelo colonial de concesiones y devolver la tierra a sus auténticos dueños.

Muchas de las plantaciones de palma aceitera que ahora son propiedad de empresas multinacionales en África occidental y central se establecieron sobre tierras robadas a las comunidades durante las ocupaciones coloniales. Tal es el caso de lo que hoy se conoce como la República Democrática del Congo (RDC), donde la multinacional angloholandesa de alimentos Unilever comenzó a construir su imperio de aceite de palma. Actualmente estas plantaciones son sitios de pobreza, conflicto y violencia constantes. Estos problemas no se solucionarán hasta que se devuelvan las tierras a las comunidades y se haga justicia por los daños que han sufrido.

En 1911, el rey Leopoldo de Bélgica otorgó al industrial británico Lord Leverhulme vastas concesiones sobre tierras que se encuentran dentro de lo que ahora es la RDC. Esas áreas boscosas, con una superficie el doble de Bélgica, estaban llenas de palmerales que los habitantes habían cuidado y desarrollado por generaciones, convirtiendo lo que alguna vez fue una sabana en uno de los bosques tropicales más importantes del mundo.

Leverhulme quería una fuente barata de aceite vegetal para la marca líder de detergente de su empresa, Sunlight, y no fue el único que recurrió al pueblo del Congo para conseguirlo. El aceite de palma, que durante mucho tiempo fue parte importante de los sistemas alimentarios de África Central, cobró creciente interés para los comerciantes europeos, especialmente para los comerciantes portugueses que para entonces visitaban regularmente las comunidades a lo largo del río Congo para comprar nueces de palma. La competencia aumentaba los precios locales de las nueces, para disgusto de Leverhulme. (1)

Las concesiones no le otorgaban a la empresa de Leverhulme, Huileries du Congo Belge (HCB), derechos sobre los territorios de las comunidades que vivían dentro de la concesión, y se suponía que habría un proceso para demarcar estas tierras. Pero Leverhulme estaba impaciente y presionó a las autoridades belgas para que le concedieran el monopolio de la compra de nueces en la zona, en virtud de los infames “acuerdos tripartitos” entre Leverhulme, la autoridad colonial belga y las comunidades locales, que en realidad no tuvieron ni voz ni voto en el asunto. A partir de entonces, los lugareños fueron tratados como ladrones si se atrevían a ofrecer nueces cosechadas de sus propios palmerales a alguien que no fuera la empresa de Leverhulme, aunque el precio del mercado abierto era generalmente tres o cuatro veces más alto que el pagado por Leverhulme.

En 1924, comerciantes portugueses con negocios en la zona de Basoko, en la actual provincia de Tshopo, enviaron una carta a la autoridad colonial belga denunciando los acuerdos:

“Este contrato celebrado el pasado 5 de julio prohíbe adquirir en cualquiera de sus formas productos derivados de la palma [aceitera], sean nueces, semillas o aceite, en la concesión otorgada a esta empresa [HCB], y lo que es aún más perjudicial para nuestros intereses, esta medida también alcanza a los productos cosechados en las tierras ocupadas por los indígenas... Los indígenas tienen derechos rigurosamente definidos sobre los campos y plantaciones, y sobre los productos allí cosechados, ¿cómo entonces podrían aceptar que se les obligue a entregar el producto de sus palmas a una sola empresa? ¿Acaso esta obligación no les priva del beneficio de la competencia? ¿Qué representantes autorizados de los indígenas podrían haber aceptado, en su propio nombre, un contrato que sólo les trae desventajas? (2)

Leverhulme y los colonialistas belgas justificaron este escandaloso monopolio con el argumento de que la empresa de Leverhulme estaba haciendo importantes inversiones en la zona con la construcción de molinos de aceite de palma, y que brindaba a los lugareños empleos, escuelas, clínicas médicas e iglesias. También inventaron, sin ninguna base científica, el argumento de que los palmerales eran “naturales” y no, como era bien sabido tanto por la gente del lugar como por extranjeros que pasaban un tiempo en la zona, que los palmerales eran el resultado del cuidado y el trabajo de varias generaciones de las comunidades locales. Considerar “naturales” a los palmerales daba lugar a que el Estado (es decir, la autoridad colonial belga) reclamara el dominio sobre ellos y justificara más fácilmente la entrega de su control a la empresa de Leverhulme.

Ninguno de los argumentos tenía peso. Las escuelas que construyó la empresa eran de mala calidad y, de todas maneras, los niños del lugar en gran medida no asistían a clases porque estaban ocupados trabajando para la empresa. Los servicios médicos de la empresa eran igualmente inaccesibles para los pobladores locales, y como admitió un administrador colonialista: *“Incluso en las circunstancias más favorables, todavía es dudoso que los beneficios de la medicina compensen todos los males que la explotación de los palmerales causa a la población... el trabajo obligatorio generalmente es demasiado pesado... El tiempo dedicado a recolectar y transportar la fruta es a menudo excesivo, y la contribución de las mujeres y los niños suele imponerles exigencias imposibles a su fuerza física”*. Se dijo que la tasa de mortalidad anual en torno a las actividades de Huileries du Congo Belge de Leverhulme llegaba a un “criminal” 10 por ciento. (3)

Además, el empleo ofrecido por la empresa era en realidad trabajo forzado. En una carta de 1925, un comisionado del distrito de Basoko le escribió al gobernador provincial sobre la situación laboral en las actividades de Leverhulme:

“El reclutamiento de trabajadores para la HCB ha sido durante muchos años tan impopular entre los indígenas que la presión moral ejercida por los administradores territoriales apenas prevalece ... Todo el distrito de Aruwini es rico, y un trabajador que recolecta productos naturales del bosque (nueces de palma especialmente) puede ganarse fácilmente la vida y generar recursos que no están disponibles para él a través del trabajo en la industria o el comercio ... La única forma de lograr una transición fácil entre el trabajo [forzado] y el trabajo libre asalariado sería pagarle al trabajador un salario que sea por lo menos igual a lo que podría ganar sin salir de su pueblo o cambiar sus costumbres. La única empresa establecida

en el distrito [la HCB] ofrece a sus trabajadores un salario que de ninguna manera les compensa sus sacrificios". (4)

Con respecto a los palmerales, estaba claro para cualquiera que hubiera pasado un mínimo de tiempo en la zona que estos bosques se crearon a partir del trabajo y el cuidado de las comunidades locales. El agrónomo y misionero belga Hyacinthe Vanderyst, que pasó años estudiando los palmerales en el Congo, publicó en 1925 un artículo en el periódico belga *Congo*, en el que escribió:

"Todas mis observaciones, investigaciones y estudios confirman de la manera más positiva y absoluta el argumento expuesto por los indígenas... Por el contrario, hasta ahora nadie ha intentado abiertamente probar que los palmerales son formaciones naturales. Esto no es más que una afirmación que carece totalmente de argumentos que la sustenten... Los indígenas se declaran dueños de los palmares, y tal vez de los bosques secundarios, y esto por varios motivos: por ser los ocupantes originales del país en términos de asentamientos estables, caza, pesca y recolección de productos naturales; por ser agricultores que desmontaron y explotaron las sabanas, que de esa forma se convirtieron en bosques y luego en palmerales; por ser creadores de palmerales gracias a su directa y deliberada intervención, que implicó la introducción de la palma aceitera en el país... ¿Por qué razones el Estado niega estos argumentos, o se niega a tomarlos en cuenta?"

Vanderyst luego advirtió a su audiencia belga: "La cuestión de los palmerales, si no se resuelve de acuerdo con las costumbres indígenas, seguirá pendiente para siempre, debido a su gran importancia material". (5)

Leverhulme y las autoridades coloniales belgas ignoraron su consejo. Unos años más tarde, las dos partes avanzaron con planes para demarcar más claramente las tierras de HCB y encerrar a las poblaciones locales en sus pueblos. Así es como un director gerente de HCB describió el arreglo en una carta al gobernador de la provincia de Equateur en 1928:

"Se les prohibirá [a los nativos] mover sus pueblos y sus campos de cultivo fuera de los límites que les han sido asignados, y se les prohibirá recolectar frutos de palmas que crezcan en nuestra tierra bajo pena de ser pasibles de persecución... Deben permanecer confinados a sus reservas... No les permitiremos tomar frutos de palma de las palmas que crecen en nuestras concesiones para simplemente venderlos a otros comerciantes, y si cometen actos de violencia contra nuestros trabajadores o contra nuestros agentes europeos, como han amenazado hacer, invocaremos la protección del Estado garantizada por el artículo 18 de nuestra Convención". (6)

La 'rebelión Pende' de 1931, en referencia al pueblo Pende del suroeste de lo que hoy es la RDC, fue una de las mayores rebeliones durante la ocupación colonial belga. Comenzó en el distrito de Kwango, en particular en los territorios de Kikwit y Kandale, zonas dominadas por el negocio del aceite de palma de HCB y otra empresa llamada Compagnie de Kasai. Una de las principales razones de la rebelión, si no la principal, fue la política brutal de la administración colonial en la zona, que, debido a la falta de mano de obra para las actividades de la palma aceitera, envió soldados a los pueblos para reclutar trabajadores violentamente. La mortalidad entre los

reclutados era extremadamente alta: por cada 20 trabajadores reclutados para recolectar frutos de palma aceitera en Lusanga y sus alrededores –el centro de las actividades de palma aceitera de HCB en la región– apenas 10 regresaban a sus aldeas. La crisis económica de principios de la década de 1930 redujo aún más los salarios de los trabajadores y llevó a los colonizadores a aumentar los impuestos, lo que empeoró la situación general. Se estima que 500 pobladores murieron en enfrentamientos con el ejército colonial durante la rebelión, y cientos más perecieron en campamentos donde fueron encarcelados en condiciones brutales. (7)

De la ocupación colonial al capitalismo financiero

La compañía de Leverhulme, que luego se transformaría en el gigante multinacional anglo-holandés de la alimentación, Unilever, terminó por convertir grandes partes de sus concesiones en plantaciones industriales de palma aceitera y dejó de abastecerse de nueces de palma de los palmerales locales restantes. En cientos de miles de hectáreas en varias partes del Congo, HCB implementó una ocupación racista y violenta de tierras comunitarias según el plan que describió su director gerente en 1928. Para las comunidades afectadas poco cambió en cuanto a condiciones laborales, acceso a tierras y bosques o la calidad de los servicios médicos, educativos y de infraestructura que la empresa debía brindar a cambio de esta ocupación impuesta sobre tierras comunitarias.

Lamentablemente, las plantaciones y concesiones de Unilever sobrevivieron el final del dominio colonial belga sobre el Congo en 1960. Las promesas vacías de “desarrollo” bajo la ocupación colonial fueron seguidas por las mismas promesas vacías bajo la dictadura de Mobutu a fines de la década de 1960 (cuando el nuevo gobierno de la RDC tomó una propiedad minoritaria en la empresa y la renombró a Plantations et Huileries du Congo-PHC). Estas promesas vacías se volvieron a repetir cuando la empresa canadiense Feronia Inc compró PHC a Unilever en 2009, con el respaldo de bancos de “desarrollo” europeos y estadounidenses con más de USD150 millones de dólares. Y más recientemente, cuando las actividades se transfirieron a una firma de capital privado con sede en el paraíso fiscal de Mauricio, con el respaldo esta vez de dotaciones universitarias, gigantes filantrópicos y fondos de pensiones. (8)

En cada uno de los casos, los propietarios e inversionistas de la empresa se basaron en una serie de documentos arreglados para justificar su ocupación de más de 100.000 hectáreas de tierra. Cuando el consorcio de bancos de desarrollo europeos se hizo cargo de PHC entre 2014 y 2016, sabían que los endeble documentos de PHC habían expirado y presionaron a la empresa para que fabricara nuevos, fragmentando las concesiones en cientos de parcelas, sin consultar a las comunidades y sin siquiera pasar por los correspondientes órganos gubernamentales de toma de decisiones. Los bancos de desarrollo, al igual que los propietarios que los precedieron y los que vendrían después, utilizaron las justificaciones habituales para este robo de tierras comunitarias: escuelas, caminos, viviendas, clínicas de salud y buenos trabajos. Pero hoy, las comunidades y los trabajadores dentro de las concesiones de PHC continúan en una desesperada situación de despojo y, por lo tanto, de pobreza. Los nuevos propietarios del capital privado de la empresa están prometiendo una vez más que pronto comenzarán a cumplir con las leyes laborales del país,

que pronto comenzarán a pagar salarios mínimos y que pronto proporcionarán escuelas y clínicas médicas que funcionen.

Las comunidades están hartas y cansadas de estas falsas promesas y quieren recuperar sus tierras para producir su propio aceite de palma y otros productos, como solían hacerlo generaciones atrás. Pero la empresa logra mantener el control con el uso de violencia. PHC ha prohibido los molinos artesanales para la extracción de palma aceitera dentro de sus concesiones y es rutina que los pobladores que son atrapados con nueces de palma sean golpeados, encarcelados, torturados e incluso asesinados por los guardias de seguridad y la policía de PHC, acusados de “robar” las nueces de las concesiones en disputa de la empresa. (9) Los trabajadores que tratan de mejorar su situación se enfrentan a una violencia similar. A principios de enero de este año, la policía convocada por PHC abrió fuego contra los trabajadores que protestaban por los salarios que no habían sido pagados en las oficinas de Boteka, hiriendo gravemente a dos pobladores. (10)

La respuesta de la empresa a las demandas de las comunidades por sus tierras siempre es que si se va, no habrá empleo para los lugareños –como si antes de que Leverhulme entrara en escena no hubiera existido una economía. Los antiguos propietarios canadienses de PHC, Feronia Inc, incluso argumentaron que no podían devolver las partes aún boscosas de sus concesiones a los lugareños ¡por el riesgo de deforestación!

Esta farsa del “desarrollo” debería haber sido desmantelada hace mucho tiempo. Las tierras que PHC y sus predecesores han robado y ocupado durante más de un siglo son, como reconocieron los belgas, “ricas” y la población local sabe mejor que nadie cómo cuidar y utilizar estas tierras y bosques para su beneficio. Es hora de terminar con el modelo colonial de concesiones y plantaciones, y su interminable promesa de “desarrollo”. Los legítimos intereses de las comunidades sólo pueden ser atendidos mediante la devolución inmediata de sus tierras. Mientras tanto, aquellos organismos extranjeros que afirman estar preocupados por el “desarrollo” deberían cambiar su enfoque para hacer que Unilever y los otros especuladores extranjeros rindan cuentas por este último siglo de violaciones de los derechos laborales, acaparamiento de tierras y otros abusos, y evitar que las empresas y los inversionistas de sus países cometan más abusos.

GRAIN, www.grain.org

(1) La información que figura en este artículo sobre la explotación colonialista de Leverhulme en el Congo, surge del increíble libro de Jules Marchal, *Lord Leverhulme's Ghosts*, Verso Books, 2008.

(2) Marchal, pág.54

(3) Marchal, pág.60 y pág. 89.

(4) Marchal, pág.71

(5) Marchal, pág.58

(6) Marchal, pág. 109

(7) Wostyn, W. 2008. De Opstand in de Districten Lac Léopold II en Sankuru (1931-1932). Een vergelijkende analyse met de Pende opstand (1931).

(8) Ver RIAO-RDC, FIAN Bélgica, Entraide et Fraternité, CCFD-Terre Solidaire, FIAN Alemania, Salva la Selva, Milieudéfense, The Corner House, Global Justice Now!, Movimiento Mundial por los Bosques (WRM), y GRAIN, "Development Finance as Agro-

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Colonialism: European Development Bank funding of Feronia-PHC oil palm plantations in the DR Congo," Enero de 2021: <https://grain.org/e/6602>; Oakland Institute, "Meet the Investors Behind the PHC Oil Palm Plantations in DRC," Febrero de 2022: <https://www.oaklandinstitute.org/meet-investors-behind-phc-oil-palm-plantations-drc>

(9) En la página web de farmlandgrab.org pueden encontrarse varios informes y artículos que ahondan en estos abusos. Ver: <https://www.farmlandgrab.org/cat/show/511>

(10) RIAO-RDC, "Policiers et militaires tirent à balles réelles sur des ouvriers de PHC en grève à la plantation de Boteka," Enero de 2022: <https://farmlandgrab.org/30712>

PETAR sin concesión: luchar contra la privatización es una lucha de las mujeres

Este artículo sale de conversaciones con mujeres del Vale do Ribeira que libran una lucha contra la concesión de uno de los parques más importantes de la región. Su lucha es fundamental y se suma a las más diversas resistencias contra la corriente privatizadora de crear 'territorios sin gente.' Nos recuerdan que su territorio es y está enraizado en sus historias, sus voces y sus resistencias.

Este texto lo escribimos entre muchas manos, a partir de conversaciones y planteamientos de mujeres que viven en el territorio de Vale do Ribeira –entre las regiones Sudeste y Sur de Brasil– y que libran una lucha contra la concesión (1) de uno de los más importantes parques de la región, el Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR). El parque, que está ubicado en los municipios de Iporanga y Apiaí, actualmente es administrado por el gobierno del estado de São Paulo y fue incluido en un plan de concesiones junto con otras unidades de conservación, lo que permitirá a las empresas privadas (nacionales o internacionales) obtener el derecho a explotar comercialmente la parte del territorio donde se concentran las principales atracciones turísticas.

Vale do Ribeira es la región de Brasil que comprende la mayor porción del bioma Bosque Atlántico (*Mata Atlântica*, en portugués) conservada en un 70%. Mientras que este bioma ha sido destruido en la mayor parte del país por los megaproyectos y la especulación inmobiliaria, en Vale do Ribeira, la relación y la defensa del bosque que practican las comunidades de la región han contribuido a conservarlo. La política de conservación diseñada para proteger esta biodiversidad desde el siglo pasado viene siendo una política 'sin gente', que ha establecido muchos parques y unidades de conservación que restringen los medios de vida de las comunidades (2) del territorio. Sólo más recientemente, a través de la lucha, algunas zonas pasaron a ser consideradas unidades de uso sostenible. Estas unidades fueron creadas por el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de Brasil y deberían funcionar bajo un régimen que tolera la presencia de comunidades en los territorios. Esto no se verifica del todo en la práctica, ya que incluso en estos lugares hay muchos conflictos entre los modos de vida y las normas de las Unidades de Conservación. Por regla general, la forma de resolver las cuestiones ambientales y territoriales en Vale do Ribeira se basa siempre en el desalojo –forzado o por agotamiento– de las comunidades que allí viven.

Los logros referentes a la implementación de más áreas de uso sostenible –donde se puede practicar la agricultura tradicional, aunque esto requiera de un permiso– permitieron la permanencia de las comunidades en el territorio, pero su verdadera reivindicación siempre ha sido la regularización de la tenencia de la tierra. Aunque llevan siglos viviendo en el territorio, la mayor parte de las comunidades no tienen sus tierras demarcadas ni tituladas, lo que genera una gran inseguridad. Los conflictos por la tierra se ven agravados por las nuevas políticas para digitalizar la planificación territorial, como el Catastro Ambiental Rural (CAR) en Brasil. (3) Es

decir, las comunidades siguen luchando por su derecho a la tierra y también siguen en conflicto con la política ambiental, sobre todo en los parques.

Privatizar concesiones por 30 años: desplazamiento, inseguridad y gentrificación

Este es el caso de las comunidades *quilombolas* (4) y *caboclas* (5) del municipio de Iporanga que se han visto sobrepasadas por el Parque Estatal Turístico del Alto Ribeira (PETAR). Ana Ercilia – habitante de Iporanga desde la infancia, monitora ambiental e involucrada en la actual lucha contra la concesión del parque al sector privado– dice que, en 1958, cuando se estableció el parque, la gente del territorio creía que iba a ser un parque de diversiones - tal era la falta de diálogo y transparencia del gobierno con las comunidades. Después de algún tiempo, llegaron a comprender la verdadera clase de parque que había llegado al territorio, a través de las restricciones en el acceso a servicios como la electricidad, y cuando se empezó a impedir a la gente renovar y realizar obras en sus propias casas y patios. Desde entonces se ha iniciado una lucha por la retirada de la zona del PETAR del barrio da Serra, un lugar que fue ‘cortado por la mitad’ cuando se estableció el parque, permaneciendo gran parte del territorio del barrio dentro del parque. El barrio da Serra comprende tanto a las comunidades tradicionales como a los residentes más antiguos de Iporanga y acoge un importante patrimonio histórico y cultural del Vale do Ribeira. La lucha de los habitantes, a través de su asociación, logró que se llegara a un acuerdo que hizo retroceder el límite del parque para que las viviendas de los habitantes quedaran fuera de la zona de restricción. Sin embargo, las zonas de cultivo quedaron dentro de la zona de la unidad de conservación, lo que restringió gravemente sus modos de vida y convirtió el turismo en la única fuente de ingresos de las familias.

La retirada se produjo, pero no hubo una regularización de tierras para la comunidad del barrio da Serra. En la actualidad, varias familias fueron desplazadas por el parque a este barrio, que se encuentra en la zona de amortiguamiento –el área alrededor del parque– del PETAR, pero el desplazamiento no fue acompañado por la titularidad de la tierra. Las familias sólo tienen un derecho de permanencia temporario, lo que certifica que el parque pueda reubicarlas cuando lo decida. (6) Esta situación es especialmente difícil para las mujeres, que tienen su trabajo concentrado en el patio de sus casas y la mayor parte de su sustento lo obtienen de este mismo lugar y de las diversas iniciativas comerciales locales.

Actualmente, las comunidades se enfrentan a una nueva ofensiva sobre su territorio. El gobierno del Estado de São Paulo, según su política privatizadora, abrió una convocatoria internacional para la concesión de un área del parque –donde se concentran las principales atracciones turísticas– por un período de 30 años. La apertura de la concesión tuvo lugar entre mediados y finales de 2021, ya en medio de la pandemia, y sin ninguna consulta pública. Desde entonces, se ha iniciado un amplio movimiento de resistencia contra la concesión del parque.

La lucha contra la concesión está organizada con la participación de habitantes, pueblos y comunidades, investigadores, activistas y seguidores en general. Las mujeres constituyen una gran parte de esta resistencia y, a través de su autoorganización, demuestran que se ven afectadas de manera singular cuando el gobierno opta por reforzar las asociaciones público-privadas de este modo. La problemática de la regularización de la tierra, por ejemplo, se ignora por completo en

este proceso. Que una empresa privada pueda literalmente ser dueña del territorio por 30 años y que las familias, y especialmente las mujeres, continúen en la inseguridad de no ser dueñas de sus tierras es una aberración, lo que demuestra claramente que la preocupación del Estado en esta concesión no es promover la mejora de la calidad de vida de las comunidades, como se afirma.

Pese al parque haber sido impuesto a las comunidades en los años 1950, éstas se apropiaron de él a lo largo del tiempo como pudieron. Una de las principales fuentes de ingreso que tienen los habitantes de la región hoy, debido a la intensa limitación de sus modos de vida, procede del turismo comunitario organizado de forma autónoma, al trabajar como guías ambientales. Actualmente hay 250 guías en el registro del PETAR y los visitantes usualmente los contratan, algo obligatorio en el caso de la visita a las grutas del parque. Son habitantes de las comunidades y no solo presentan las atracciones del parque a los turistas, sino que también cuentan la historia del Vale do Ribeira y de las comunidades donde viven. El reconocimiento del trabajo de los guías como un trabajo remunerado estuvo en las negociaciones entre el gobierno del estado de São Paulo y las comunidades, como una alternativa de ingresos frente a las restricciones en el uso del territorio y a las prácticas convencionales que se han convertido en crímenes ambientales. Pero una de las alteraciones que propone la nueva convocatoria de privatización es que los turistas puedan hacer recorridos autoguiados dentro del parque, lo que iba a dificultar aún más los ingresos de los guías ambientales pues ya no serían indispensables para el turismo.

Con la concesión, el protagonismo en el sector del turismo ya no sería de las comunidades – especialmente de las mujeres que gestionan los diversos pequeños negocios alrededor al parque– sino de la empresa concesionaria. El plan de concesiones implica, por ejemplo, aumentar considerablemente la visitación anual del parque, crear rutas vehiculares y divulgar nuevas atracciones. Las mujeres que luchan contra la concesión argumentan que, con estas iniciativas, el gobierno busca imponer otra clase de turismo en el territorio: en lugar de que la gente se interese por conocer las comunidades a través de los guías locales, que además son una fuente de conocimiento de los modos de vida locales, se construye un turismo organizado por empresas, que va a priorizar la contratación de guías bilingües, por ejemplo, y no la comunidad local.

Este paquete turístico desmantela ‘el flujo del sustento’, un tipo de economía que la comunidad ha construido a lo largo del tiempo, y pasa a convertirse en una atracción turística más. Esta nueva tendencia extremadamente colonialista se ha profundizado en el gobierno neoliberal del estado de São Paulo, que está implementando un programa de desarrollo llamado ‘Vale do Futuro’ (Valle del Futuro). Otras comunidades, además de las que se encuentran alrededor del PETAR, fueron clasificadas como atracciones turísticas por este programa, incluso con la colocación de señales de tráfico que las señalizan a lo largo de las carreteras, sin que se haya realizado alguna consulta o diálogo con las comunidades al respecto. Así, la comunidad se convierte en extranjera en su propio territorio. La gentrificación, que ha de producirse, por ejemplo, a través de la construcción de hoteles y del aumento de las tarifas de entrada –acciones previstas en el proceso de concesión– puede incluso hacer inviable el acceso de las personas de las comunidades al parque, un lugar que la comunidad conoce muy bien y disfruta.

El efecto previsto es que, al contrario de la valoración de las comunidades y la construcción de alternativas económicas, cada vez más se les expulsará del territorio obligándolas a migrar hacia

las periferias de las grandes ciudades en su entorno, una tendencia que ya se puede observar, sobre todo entre los jóvenes, que ya no permanecen en el territorio. Además, para las jóvenes que se quedan en el territorio, hay una preocupación permanente debido al incremento de la violencia sexual y la cosificación de los cuerpos de las mujeres ante el significativo aumento de hombres que vienen de fuera. La concesión del parque también no ofrece ninguna contrapartida de mejora en las políticas públicas que atienden a las comunidades. Como la concesión, si llega a producirse, tendrá una duración de 30 años, las mujeres se preocupan especialmente por sus hijos pequeños, que van a pasar su infancia, adolescencia y vida adulta en este territorio privatizado.

Esta privatización se está llevando a cabo al mismo tiempo en que avanza el proyecto *Vale do Futuro* en Vale do Ribeira, lo que también plantea cuestiones sobre la forma de explotación del territorio. El frente principal de este proyecto de desarrollo ha sido la apertura de la región a la minería, mientras que toda la región de Iporanga, incluida la zona de PETAR, ya ha sido explotada por la minería en otras ocasiones. Como el proceso de concesión prevé el uso y explotación del territorio, esto genera la sospecha de que después de todo la minería pueda volver en algunas partes del territorio, incluso dentro del PETAR, ya que, como afirman las mujeres, en estos proyectos “todo está conectado y atado”.

En el ámbito legal, todo este proceso ha sido conducido a base de aprobaciones en la oscuridad de la noche, sin ninguna participación de las comunidades directamente afectadas e incluso con el Estado haciendo uso de documentos de otras reuniones (actas, fotos), argumentando que se trataba de reuniones sobre la concesión, donde se habría consultado a la comunidad. Debido a la pandemia, el cuidado sanitario se convierte en una coartada para no realizar grandes consultas públicas. Lo que sucede en la práctica es que las audiencias se vacían a propósito, ya que se proponen en formato digital o de forma presencial en la capital del estado, en un contexto en el que los habitantes no tienen acceso a internet ni recursos para desplazarse. Las acciones previstas en la convocatoria pública, que desarrollará la empresa que gane la concesión, contemplan actividades que van en contra del Plan de Manejo del parque, lo que expone el racismo ambiental que implica la privatización: si es para que las empresas desarrollen sus negocios, no hay que tener en cuenta los estudios de impacto ambiental. A pesar de ello, esta forma de realizar la concesión, que no respeta el derecho de las comunidades tradicionales a la consulta previa, libre e informada (Convenio 169 de la OIT) ha sido entendida por una parte del poder judicial como válida, lo que ha agilizado el proceso pese a estas irregularidades.

En una ofensiva aún mayor que la del gobierno del estado de São Paulo, gobernado por João Dória, el gobierno federal de Jair Bolsonaro divulgó el 07 de febrero de 2022 un decreto de concesión/privatización de cinco Unidades de Conservación. Una de ellas, el Parque Nacional de la Sierra de Canastra, fue creado durante la dictadura militar y se superpone a zonas de 1,5 mil familias de productores rurales, incluyendo 43 comunidades y 550 familias tradicionales, reconocidas como *Canastreiros* [comunidad ancestral que vive en la sierra de Canastra].

Las mujeres se autoorganizan y resisten

Cuando no se escucha a nadie, menos aún se escucha a las mujeres. Si los espacios de participación son escasos, suelen asignarse sólo a unos pocos líderes –generalmente hombres–

que, debido a la estructura patriarcal de las propias comunidades, no llevan al debate público las observaciones, argumentos y preocupaciones de las mujeres. Esto, unido a la falta de respeto con la que el Estado ha tratado el tema de la participación, hizo que las mujeres se unieran en un colectivo propio, donde organizan la lucha contra la concesión desde la autoorganización. Además de hacer crecer la resistencia a través de la pluralidad de voces, los espacios autoorganizados por las mujeres también son importantes como forma de autocuidado frente al asedio que el Estado promueve durante el proceso, que incluso ha generado enfermedades mentales y emocionales dentro de las comunidades.

Lo que resulta evidente es que las formas de conservación "sin gente", que se han adoptado como modelo y que dictaron la política ambiental de muchos países durante décadas, incluso la de Brasil, están demostrando ser muy eficientes para el capital en este período histórico de expansión de sus fronteras. Al crear territorios sin gente, se crean también territorios sin resistencia, donde los proyectos privatizadores como la concesión de PETAR pueden desarrollarse sin obstáculos. Creemos que la lucha contra la concesión en este caso será exitosa porque las comunidades de Iporanga nunca aceptaron no ser dueñas de su territorio y con el tiempo, ya que la imposición del parque fue una realidad que no pudieron cambiar, se convirtieron cada vez más en sus dueñas, apropiándose de los medios para vivir y crear en ese entorno mientras seguían sacando a la luz y luchando contra los conflictos aún latentes, como la falta de titulación de las tierras.

No es casualidad que el Estado pretenda, en el plan de concesión, cerrar uno de los accesos del parque a través del municipio de Iporanga, a pesar de esta entrada facilitar mucho la visita a una de las cuevas más destacadas del parque. Se trata de un intento de excluir a las comunidades más resistentes, haciendo inviable tanto su acceso al parque como su labor como guías ambientales. Esto nos recuerda que la historia de Vale do Ribeira ha sido una historia de eliminación de los caminos recorridos por las comunidades tradicionales y de construcción de caminos que privilegian el flujo del capital, con la BR 116 como un símbolo de ello –una importante carretera, responsable de gran parte del flujo de mercancías en la región del sureste, que atraviesa buena parte de los municipios de Vale do Ribeira en la mitad.

Lo que sí sabemos es que los viejos caminos nunca dejan de utilizarse, y que las personas mayores se preocupan especialmente por recordar a los jóvenes por dónde pasan esos caminos, dónde están y hacia dónde conducen. Si el proyecto de privatización busca sacar a las comunidades de su territorio mediante la reordenación de los caminos es porque no cuentan con la capacidad de resistencia e invención de los pueblos que los trazaron.

Natália Lobo e Miriam Nobre – SOF, Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil

Jéssica Cristina Pires – Caiçara, quilombola, técnica en agroecología, representante de las comunidades de Iporanga, Colectivo de Mujeres del PETAR, Movimiento Petar sin Concesiones

Paula Daniel Fogaça - Bióloga, Magíster en Sostenibilidad

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

- (1) Para apoyar la lucha de las mujeres organizadas contra la privatización de PETAR y seguir este movimiento, accede y firma la petición en línea: <https://www.petarsemconcessao.minhasampa.org.br/>
- (2) La región de Vale do Ribeira acoge a diversas comunidades y pueblos tradicionales, como los Pueblos Indígenas Guaraní Mbyá y Guaraní Nandeva, comunidades *quilombolas*, *caiçaras* y *caboclos*.
- (3) El Catastro Ambiental Rural (CAR) es una herramienta creada por el nuevo Código Forestal de Brasil, que consiste en un registro digital georreferenciado de todo el territorio rural del país. Esta herramienta, que debería servir para orientar la implementación de las políticas ambientales, se utiliza como un documento que justifica lo que se ha llamado acaparamiento digital de tierras en muchos países del Sur Global. Para saber más: <https://grain.org/es/article/6651-infografia-cercas-digitales-el-acaparamiento-tecnologico-de-tierras>
- (4) Los *quilombolas* son residentes de quilombos, comunidades de resistencia y refugio originalmente creadas por personas negras esclavizadas durante la época colonial en Brasil.
- (5) Los *caboclos* o *caiçaras* son un pueblo tradicional que vive en las zonas costeras del sureste y el sur de Brasil. Son descendientes de africanos, indígenas y europeos, y sus costumbres se basan en la agricultura, la caza y la pesca de subsistencia.
- (6) Para más información sobre la historia de Bairro da Serra y la relación de las comunidades tradicionales de Iporanga con el PETAR, véase [en portugués] "*Florestas e lutas por reconhecimento: território, identidades e direitos na Mata Atlântica brasileira*" de Pedro Castelo Branco Silveira. Disponible en: <https://revistas.ufpr.br/campos/article/view/26092/17361>

El modelo de concesión del sudeste asiático: ¿cerrando el círculo?

Los movimientos coloniales y anticoloniales han moldeado los modelos e impactos de las concesiones en el sudeste asiático. En algunos casos las comunidades han sufrido despojos disfrazados de concesiones. En otros, las concesiones son parte de una reconcentración de la tenencia de la tierra. De una u otra manera, el modelo de concesión encaja en las ideologías de modernización.

Una plantación es una maquinaria que reúne tierra, mano de obra y capital en grandes cantidades para la producción de monocultivos con destino a un mercado mundial. Es intrínsecamente colonialista, y se basa en la suposición de que las personas del lugar son incapaces de producir de manera eficiente. Una plantación se apropia de la vida para controlarla: del espacio, el tiempo, la flora, la fauna, el agua, los productos químicos, las personas. Es propiedad de una empresa y está dirigida por gerentes que siguen los lineamientos dictados por las burocracias.

Tania Li, *Plantation Life*, Duke University Press 2021

Las luchas por la tierra desempeñaron un papel importante en los movimientos anticolonialistas del sudeste asiático de mediados del siglo XX. En algunos casos, por ejemplo en el norte de Vietnam, la mira estaba principalmente en los terratenientes locales beneficiada por su asociación con el régimen colonial. Las propiedades de estos terratenientes eran de unas pocas hectáreas como máximo. En otros lugares, en cambio, la mira estuvo puesta en propietarios de plantaciones mucho más grandes –franceses en Indochina, holandeses en Indonesia, británicos en Birmania y Malasia y estadounidenses en Filipinas–, cuyas propiedades se convirtieron en el blanco del impulso independentista y cuya vinculación con la flagrante desigualdad que imperaba hizo que los movimientos independentistas se inclinaran a la izquierda.

A la luz de esta historia, existe una clara ironía en la revitalización del modelo de concesiones del siglo XXI, particularmente porque los países que han tenido una historia de reformas agrarias socialistas parecen haber aplicado el modelo con particular entusiasmo. Los cultivadores a pequeña escala de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam han sufrido el despojo provocado por el acaparamiento de tierras disfrazado de concesiones. En países como Filipinas, Indonesia y Tailandia, que promulgaron reformas redistributivas preventivas para compensar el descontento rural, las concesiones forman parte de una reconcentración de la tenencia de la tierra. Esto plantea interrogantes tanto sobre las razones por las que el modelo de tenencia de la tierra a gran

escala regresa de esta forma, como sobre los impactos en los pequeños propietarios y en los bosques de la región.

Esencialmente, el modelo de concesión implica que un organismo gubernamental otorgue a una empresa comercial el derecho a la extracción de recursos a gran escala y/o el uso de la tierra para cultivos perennes o anuales, generalmente en forma de arrendamientos a largo plazo. Las concesiones incluyen no solo las plantaciones agrícolas sino también otras actividades como la silvicultura (extracción maderera y plantaciones de árboles de rápido crecimiento), la minería, la explotación de canteras, la energía hidroeléctrica, el turismo y el desarrollo industrial, este último a menudo en las denominadas zonas económicas especiales que tienen leyes laborales y ambientales diferentes a las del resto del país en que se encuentren. Muchas de las concesiones del sudeste asiático, aunque no todas, se han otorgado a empresas de países vecinos. En el sudeste asiático continental, los gobiernos de países menos industrializados como Camboya, Laos y Myanmar han firmado acuerdos de concesión principalmente con empresas de China, Tailandia y Vietnam. Empresas de Singapur y Malasia invierten en Indonesia con la palma aceitera.

Las consecuencias sociales y ambientales del modelo de concesión son múltiples. La tierra que se otorga para plantaciones de monocultivos a menudo forma parte de extensos sistemas de cultivo en los márgenes de las tierras altas, en tierras que solían ser cultivadas por minorías étnicas bajo el régimen de agricultura migratoria. Las autoridades estatales clasifican las tierras en barbecho dentro de tales sistemas como 'tierras baldías' o 'tierras degradadas'. Las concesiones también son responsables de la deforestación generalizada, en una región que ha experimentado la pérdida o degradación de bosques más rápida que en cualquier otra parte del mundo.

Existe un estrecho vínculo entre las concesiones forestales y las concesiones de tierras. En Tailandia, hasta 1989, gran parte de las tierras boscosas del país fuera de los parques nacionales y santuarios de vida silvestre fue otorgada como concesiones madereras. La preocupación por los impactos ambientales y humanos de la extracción maderera llevó ese año a la cancelación de estas concesiones, muchas de las cuales habían abierto zonas de bosque para infraestructura vial y atraído un tipo de trabajo que provocó la deforestación por parte de pequeños propietarios en zonas que habían sido antes de extracción maderera. Tras la cancelación de las concesiones madereras, el Departamento Real Forestal otorgó concesiones a grandes inversores para la plantación de monocultivos de árboles, en especial eucaliptos y caucho, en nombre de la reforestación. El controvertido Plan de Acción Forestal en los Trópicos (TFAP, por su sigla en inglés) del Banco Mundial de fines de la década de 1980, estuvo implicado en dicha política de concesiones. El resultado fueron años de conflicto entre esas plantaciones y pequeños propietarios, en su mayoría pobres, cuyas tierras sin título fueron confiscadas, algunos de los cuales no tuvieron más opción que seguir deforestando aún más tierras para su supervivencia. Entre éstos figuraban grupos étnicos Laosianos y Jemer del noreste de Tailandia y grupos indígenas de las tierras altas como los Karen, del norte. En Camboya, la cancelación de las concesiones madereras en la década de 1990 fue seguida por el otorgamiento de concesiones productivas de tierras, que en principio se utilizarían para cultivos comerciales. De hecho, se deforestaron grandes extensiones de tierra para establecer tales plantaciones, las cuales finalmente nunca se concretaron ya que la principal ganancia que se obtenía era de la madera y

no de los cultivos, en lo que a menudo eran tierras bastante marginales. Un proceso similar ocurrió en Kalimantan, Indonesia.

En Camboya, que desde el año 2000 ha perdido más de una cuarta parte de sus bosques, hay estudios que sugieren que el 30 por ciento de la deforestación durante el mismo período se debe a una combinación de concesiones de bosques y de tierras productivas. Además, otra parte importante es la deforestación realizada por quienes fueron desplazados por la concentración de la tierra en manos de actores económicos más poderosos. En la provincia de Ratanakiri, en el noreste del país, el paisaje que alguna vez fue boscoso se ha transformado de manera radical, en la medida que las tierras indígenas se perdieron en favor de los concesionarios que cultivan árboles como el caucho y el castaño de cajú. Numerosas comunidades sin tierra de la etnia Khmer se han mudado de las tierras bajas hacia zonas anteriormente cubiertas de bosques o que formaban parte de los ciclos de barbecho de los agricultores itinerantes indígenas, en las que se han dedicado al cultivo de plantaciones en régimen de pequeñas propiedades.

¿Por qué los gobiernos de esta región que llegaron al poder en gran medida sobre la base de reclamos territoriales contra regímenes anteriores han estado tan dispuestos y capaces de emplear el modelo de concesiones y desposeer a sus propios ciudadanos? Para responder esta pregunta se requiere que analicemos los legados de los sistemas socialistas, la ideología desarrollista, las estructuras político-económicas y los modelos de inversión transnacional.

A medida que los países que históricamente aplicaron modelos y principios socialistas de tenencia de la tierra fueron cambiando hacia la producción basada en el mercado, mantuvieron el control estatal sobre gran parte de los territorios nacionales. Vietnam, Laos y Camboya realizaron experiencias que implicaron una combinación entre la colectivización y la agricultura, silvicultura y extracción maderera estatales. En la década de 1980, las reformas orientadas al mercado eventualmente condujeron otra vez a la agricultura a pequeña escala, pero se reservaron grandes áreas bajo la administración estatal. Esto facilitó el otorgamiento de arrendamientos a largo plazo a inversionistas nacionales o extranjeros de extensiones de tierra de miles de hectáreas. En Myanmar, la organización socialista de la agricultura se implementó principalmente a través de políticas de adquisiciones estatales en lugar de un control estatal o colectivo directo, pero dentro de ese sistema se les dijo a los agricultores qué cultivos plantar y se les exigió que entregaran sus cultivos a precios inferiores a los del mercado. A medida que el país se abría económicamente a partir de la década de 1990, el ejército se unió a personas poderosas en lo que a menudo se denomina acaparamiento de tierras clientelista, que supuso una continuidad de la propiedad estatal de la tierra amparada por la constitución, y la aplicación del modelo de concesión.

La economía política de cada país moldea las vías y los modelos de las concesiones. En Camboya, el partido gobernante alcanzó el poder político y se afianzó en él a través del clientelismo, con gran desigualdad en concesiones de bosques y tierras del país. Por lo tanto, muchas de las concesiones están en manos de poderosos actores nacionales, pero los inversores vietnamitas, tailandeses y chinos también han obtenido concesiones a gran escala para el azúcar, el caucho y otros cultivos, así como para el turismo y la actividad industrial.

El modelo de concesión encaja perfectamente en las ideologías de la modernización, particularmente en la era neoliberal globalizada en la que se supone que políticas del gobierno de Laos como la de “convertir la tierra en capital” catalizarán la agricultura impulsándola de un estado de ‘atraso’ a prácticas ‘modernas’. Detrás de tal ideología, sin embargo, subyacen varios supuestos muy cuestionables. Entre ellos, la relativa eficiencia de las grandes propiedades en comparación con las plantaciones de los mismos cultivos en manos de pequeños propietarios, el goteo que se supone que la agricultura impulsada por los inversores aporta al bienestar rural, y la restauración de tierras supuestamente degradadas a través del modelo de concesión. Lo que no está en duda es que el modelo sirve a los intereses tanto de los inversionistas comerciales como de los funcionarios gubernamentales involucrados en el otorgamiento de las concesiones. Esto ha ocurrido no solo a expensas de la cubierta boscosa restante del sudeste asiático sino también de los pequeños agricultores de la región cuyo desplazamiento y otras fracturas de sus medios de vida, tendrán impactos duraderos.

*Philip Hirsch,
Profesor Emérito de Geografía Humana, Universidad de Sídney, Australia*

Las concesiones de conservación como una forma de neocolonización: La Red de Parques Africanos

La industria de la conservación ahora promueve la idea de ‘comprar’ las Concesiones de Conservación y reconstituirlas como modelos de negocio con fines de lucro. Un ejemplo de ello es la ‘Red de Parques Africanos’ (African Parks Network), que administra 19 Parques Nacionales y Áreas Protegidas en 11 países de África.

Las concesiones con fines supuestamente de conservación (parques nacionales, áreas protegidas, reservas naturales, etc.) tienen sus raíces en las ideas y creencias que sustentaron la colonización europea. El concepto de Áreas Protegidas se originó en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, fundado en el deseo de preservar zonas ‘intactas’ de ‘vida silvestre’ sin presencia humana, principalmente para la caza de élite y el disfrute de la belleza del paisaje. Los parques nacionales de Yellowstone y Yosemite fueron violentamente vaciados de sus habitantes y proporcionaron el modelo para ‘hacer conservación’ que continúa hasta el día de hoy. Durante ese mismo período, los colonizadores europeos categorizaron grandes extensiones de los territorios ocupados en África como ‘áreas de caza’, después de desplazar por la fuerza a las poblaciones de dichas zonas. Esas reservas a menudo se crearon después de que los cazadores colonialistas hubieran exterminado gran parte de las poblaciones silvestres, en un intento por restaurar dichas poblaciones para poder continuar con la caza de ‘grandes especies’.

Sin embargo, la retirada de los colonizadores europeos de África no trajo el retorno a la tenencia consuetudinaria de la tierra. Los Estados recién formados a menudo continuaron con las políticas de uso y conservación de la tierra de los colonizadores, lo que demuestra cuán profundamente se habían institucionalizado las normas y los sistemas de conocimiento coloniales. Los procesos de colonización siempre han ido acompañados de la idea de que la ‘naturaleza’ está separada de los humanos, y que la ‘civilización’ es mejor que la impredecible e improductiva ‘tierra salvaje’. La idea de crear zonas de ‘naturaleza sin humanos’ tiene sus raíces, pues, en el pensamiento racista y colonialista de que solo los hombres blancos ‘civilizados’ podrían proteger y administrar esta ‘naturaleza’. Ellos y solo ellos podrían entrar en esta otra ‘naturaleza’ ‘libre de humanos’.

Y podemos observar que en muchos lugares esta idea persiste hasta el día de hoy. El turismo de safari, por ejemplo, es tan solo una continuación de esta tradición. Los turistas adinerados (predominantemente blancos) pagan grandes sumas de dinero para hospedarse en hoteles de lujo y tener el permiso de disparar a los animales (con armas o cámaras) considerados como trofeos. Mientras tanto, aquellas poblaciones que cazan para subsistir dentro de sus territorios-convertidos-en-parques son tildados de cazadores furtivos, y son criminalizados. Ese tipo de turismo depende de ciertas ideas sobre lo que significa ‘África’ para quienes realizan los safaris, lo que revela la mentalidad colonialista que creó estas reservas en primer lugar. Es por eso que las áreas protegidas son en su mayoría paisajes ‘libres de personas’. Las personas rara vez son

consideradas como una parte intrínseca de la naturaleza y, si lo son, se las representa como intrusos o ‘cazadores furtivos’, o como paisajes turísticos para la compra de artesanías o para ver sus bailes, o como guías o ecoguardias que trabajan para una empresa extranjera o una ONG.

La mayoría de las ONG conservacionistas internacionales han facilitado esta imagen de los Pueblos Indígenas como invasores de sus propios territorios. Este relato ha puesto convenientemente el enfoque en la lucha contra las personas que usan el bosque para su subsistencia, en lugar de apuntar a los patrones de consumo y los intereses económicos de quienes apoyan y financian a dichas ONG.

El Parque Nacional Serengeti en Tanzania, por ejemplo, es quizás el símbolo más conocido de la ‘naturaleza salvaje de África’. Sin embargo, en la propaganda turística del Parque apenas se menciona cómo se creó el Serengeti: expulsando a los Indígenas Maasai de sus territorios ancestrales durante la época colonial. Y esta situación continúa hasta el día de hoy. (1)

Mordecai Ogada, coautor del libro ‘The Big Conservation Lie’ (La gran mentira de la conservación), explica en una entrevista realizada en 2021 que los espacios geográficos de las Áreas Protegidas funcionan frecuentemente como colonias, con la diferencia de que ya no están bajo la administración de un imperio sino de un red de élites con claros intereses económicos y políticos. (2) Explica que éstos son los colonizadores en las concesiones de conservación. Entran en estos acuerdos con grandes sumas de dinero y con frecuencia influyen en cualquier política nacional que pueda afectar sus intereses y áreas administradas. El poder de estas redes de colonizadores es tanto físico –imponen su régimen y dominio sobre el terreno– como político –tienen aliados en lugares estratégicos que administran oficinas gubernamentales y posiciones de financiación claves–, explicó Ogada. Además, los posibles conflictos que puedan surgir se descartan fácilmente como si no fueran su responsabilidad; esto lo hacen colocando la carga sobre la ‘condición soberana’ de los gobiernos nacionales. Estas redes responden a los donantes, a la industria turística y a los propios turistas, que se encuentran principalmente en el Norte global. Y perduran a base de imágenes de paisajes apacibles, que en su imaginación son paisajes sin gente.

Estas redes también involucran a poderosos empresarios con interés en financiar la conservación para compensar sus emisiones o encubrir sus actividades turbias y destructivas. Entre los ejemplos recientes figuran Jeff Bezos, CEO del gigante del internet Amazon, y su ‘Fondo para la Tierra’ de diez mil millones de dólares, con algunas de las mayores ONG conservacionistas recibiendo 100 millones de dólares cada una en una primera ronda de pagos (3), y las donaciones del empresario multimillonario suizo Hansjörg Wyss a la llamada iniciativa ‘30x30’ (4), cuyo objetivo es que para 2030, el 30 por ciento del planeta se convierta en Áreas Protegidas.

Actualmente, la industria de la conservación promueve la idea de ‘comprar’ las concesiones de conservación (Áreas Protegidas o Parques) y reconstituirlas como modelos de negocio con fines de lucro. Un ejemplo de ello es la ‘Red de Parques Africanos’ (APN, por su sigla en inglés), que administra 19 Parques Nacionales y Áreas Protegidas en 11 países de África.

La Red de Parques Africanos: la subcontratación de áreas protegidas a empresas privadas

La ‘Red de Parques Africanos’ (APN – African Parks Network) fue fundada en el año 2000 por el magnate multimillonario holandés Paul Fentener van Vlissingen. Su nombre fundacional fue Fundación de Parques Africanos. Fentener proviene de una de las dinastías industriales más ricas de los Países Bajos y fue director ejecutivo del conglomerado de energía SHV Holdings, que hizo negocios con el régimen del apartheid de Sudáfrica. Supuestamente tuvo la idea de crear ‘Parques Africanos’ después de una cena organizada por Nelson Mandela que contó con la presencia de la Reina Beatriz de los Países Bajos, en la que se discutió el futuro de los parques nacionales de Sudáfrica. Para el multimillonario era la oportunidad perfecta de restaurar su imagen, deteriorada por sus actividades durante el régimen del apartheid. Creada inicialmente como una empresa comercial, ‘Parques Africanos’ cambió este estatus por el de ONG en 2005, lo que atraería más fácilmente a donantes y fondos para la conservación. (5)

El modelo de negocios de APN se basa en una estrategia de Asociación Público-Privada para la administración de las Áreas Protegidas, en la que APN mantiene la plena responsabilidad y ejecución de todas las funciones de administración y rinde cuentas al gobierno. APN aplica un criterio comercial para la conservación de la vida silvestre, argumentando que ésta puede pagar su conservación si está ‘bien administrada’. Se presenta como una “solución africana para los desafíos de conservación de África”. (6) Sin embargo, detrás de la fachada de APN hay un gran grupo de gobiernos del norte y del sur, instituciones multilaterales, organizaciones conservacionistas internacionales, fundaciones de familias millonarias e individuos que financian su negocio de la conservación.

Desde 2017, el presidente de la empresa es el príncipe Henry de Gales, también conocido como el príncipe Harry, miembro de la familia real británica, que ha ayudado en la adquisición de fondos y socios.

APN controla una superficie total de 14,7 millones de hectáreas en África, aproximadamente la mitad del tamaño de Italia, y tiene la intención de expandirse aún más para administrar “30 parques en 11 biomas para 2030, asegurando la buena administración de 30 millones de hectáreas, contribuyendo así a la visión más amplia de tener el 30% de los paisajes únicos de África protegidos a perpetuidad”. Además, su hoja de ruta para 2030 establece que “otras 10 áreas protegidas que abarcan otros cinco millones de hectáreas serán administradas por socios selectos a través de nuestro recién creado ‘Programa incubadora’. Estos objetivos son ambiciosos y contribuirán significativamente a la meta mundial de proteger el 30% de la Tierra para mantener la prosperidad del planeta”. (7)

APN también revela su interés en vender bonos de carbono como fuente adicional de ingresos. Aunque tales créditos básicamente facilitan mayor contaminación y quema de combustibles fósiles, la página web de APN afirma que su modelo de conservación “representa una solución basada en la naturaleza al cambio climático (...). Dejamos seguro el carbono capturado en las plantas y el suelo en lugares de alto valor para la biodiversidad”. (8)

Sin embargo, en los hechos, las experiencias revelan cómo esta llamada ‘asociación’ público-privada en realidad refuerza y recrea relaciones de poder opresivas.

Un estudio académico de 2016 sobre la **Reserva de vida silvestre Majete en Malawi** es un buen ejemplo. (9) La reserva es administrada por APN desde 2003, con una concesión de manejo por 25 años. Fue el primer parque en ser administrado por APN. Según la concesión que se le otorgó, APN debe dar participación a los miembros de la comunidad en el manejo de la reserva. Esto supone consultarles en temas que requieren decisiones cruciales, como traer nuevos animales a la zona y permitir que dichos miembros utilicen y accedan a algunos de los recursos de la reserva, como pasto, peces y juncos.

Si bien existe una asociación formal y legal entre el gobierno de Malawi y APN sobre la distribución de las ganancias, no existe un acuerdo formal o claro entre las comunidades locales y APN acerca de cómo se distribuirán los beneficios. Los beneficios para las comunidades son solo indirectos, a partir de actividades como la venta de alimentos y la realización de bailes para un público turista. APN argumenta que, además de acceder físicamente a los recursos de la reserva de caza, las comunidades se beneficiarán de la conservación de la vida silvestre por los empleos creados, las actividades generadoras de ingresos en las que participan y a través de las iniciativas de responsabilidad empresarial de APN. Sin embargo, según la investigación, a las comunidades rara vez se les permite pescar o recolectar miel o juncos en la reserva de caza. En su lugar, se les permite cosechar pasto pero únicamente en épocas específicas del año. El argumento de la administración del parque es que se supone que las comunidades deben proteger y conservar estas zonas, y que esa cosecha molesta a los animales.

Una mujer entrevistada para la investigación declaró: “Perdimos el control sobre nuestros medios de subsistencia, pero tampoco podemos ser empleados por APN; se nos impide acceder a los recursos que necesitamos para la subsistencia de nuestra vida diaria, como pescado, hongos y miel”.

La misma investigación también subraya cómo APN usó engañosamente a la población local para lograr sus propios objetivos, de manera tal que no benefició a la comunidad en su conjunto. Por ejemplo, APN utilizó un vago acuerdo con los jefes locales (quienes fueron llevados a otros parques nacionales para un recorrido) como justificación para implementar una extensión de la reserva de vida silvestre en tierras ancestrales que estaban siendo cultivadas por las comunidades. Esto dejó a los miembros de la comunidad no solo sin voz sino también divididos. Esta situación se ha visto agravada aún más por la táctica de APN de coaccionar a las familias, y en particular a las mujeres, ofreciéndoles cubrir los gastos escolares de sus hijos.

Entrevistas con jefes locales y líderes de organizaciones comunitarias también revelaron que, aunque están informados sobre los nuevos cambios dentro de la reserva, no tienen ningún poder para objetar las decisiones de gestión de APN. En consecuencia, se ven obligados a alinearse con la dirección de APN por temor a poner en peligro su relación con la organización.

El **Parque Nacional Odzala-Kokoua en la República del Congo** es otro caso que merece ser destacado. El Parque, creado en 1935 cuando el país era colonia francesa, se apropió de la mayor superficie de bosques de la región, llegando a los 1,35 millones de hectáreas. Desde 2010, la administración de este “nirvana para los amantes de la naturaleza”, como lo describe APN, ha sido puesta enteramente en manos de APN por un período de 25 años. Entre los socios del Parque figuran grupos como lo ONG conservacionista WWF, y la Unión Europea.

APN se asoció con Congo Conservation Company (CCC), una empresa creada y financiada por una filántropa alemana para realizar actividades turísticas comerciales en el Parque Nacional Odzala-Kokoua. Esto incluye tres albergues de alto nivel, a los que los turistas pueden acceder en vuelos chárter desde la capital congoleña, Brazzaville. Sin embargo, muy pocos habitantes de Brazzaville tienen la posibilidad de disfrutar de este turismo de lujo. Una visita de 4 días al Odzala Gorilla Discovery Camp, por ejemplo, cuesta US\$ 9.690 dólares por persona.

Si bien el Parque fue fundado en 1935, APN afirma que “la zona ha sido ocupada por seres humanos desde hace 50.000 años”. La compañía señala que todavía hay 12.000 personas que viven alrededor del Parque, “y aún así sigue siendo una de las zonas biológicamente más diversas y ricas en especies del planeta” (énfasis agregado). Con esta formulación, más que reconocer la contribución de los habitantes para mantener el bosque en pie después de todos estos miles de años, la empresa deja claro que, a su juicio, la presencia de personas no es compatible con el objetivo de conservar los bosques; es a pesar de la presencia de las comunidades que todavía queda algo de biodiversidad. (10)

APN afirma proteger el Parque “con un equipo de ecoguardias mejorado y otras técnicas para la aplicación de la ley”, además de invertir en “cambiar el comportamiento humano”. Estas afirmaciones y puntos de vista sobre la conservación dejan en claro que para esta Red y sus patrocinadores y aliados, las personas que viven en los bosques y sus alrededores son consideradas una amenaza y que su negocio de conservación puede funcionar mejor sin ellas.

De hecho, según un estudio sobre la relación histórica entre las comunidades y la administración del Parque, se estima que 10.000 personas fueron desalojadas tras la creación del Parque en 1935, y nunca fueron compensadas por su pérdida. El estudio también señala que a pesar de la política más reciente de APN que sugiere la ‘participación’ y la ‘representación’ de las comunidades en los procesos de toma de decisiones, el sentimiento general entre las comunidades entrevistadas es que el Parque ha sido construido no solo por extranjeros sino también para extranjeros. Algunos miembros de la comunidad dijeron: “No queremos este parque que no nos da nada y menoscaba nuestros medios de vida; nos priva de nuestros derechos sobre el bosque. Nuestros derechos de acceso a recursos y tierras se respetan muy poco”. Otra persona dijo: “Los ecoguardias incautan lo que cazamos. Hay más miseria y pobreza porque no solo no podemos alimentarnos bien, tampoco podemos vender algo de lo que cazamos para comprar productos básicos como jabón y gasolina”. (11)

No debería causar sorpresa que por más de 10 años APN haya mostrado interés en explorar la posibilidad de que el Parque Odzala-Kokoua pudiera convertirse en un proyecto REDD+, porque a

través del lente de dichos proyectos, las comunidades también son consideradas una amenaza y culpadas de la deforestación. (12) Además, no existen disposiciones para que las comunidades reciban una parte de las ganancias de la venta de créditos de carbono.

Para WWF, son las personas y no las empresas mineras quienes amenazan los bosques

El Parque Nacional Odzala-Kokoua no es el único parque de la región. Es parte de lo que WWF llama el 'Paisaje Tridom', una zona que cubre el 10 por ciento de todo el bosque tropical de la cuenca del Congo, que incluye otros dos parques: la Reserva de Fauna Dja en Camerún y el Parque Nacional Minkébé en Gabón. Pero varios proyectos a gran escala están planificados dentro del 'Paisaje Tridom', en particular una zona de 150.000 hectáreas para concesiones para minería de hierro en la región fronteriza de Camerún-Congo. Debido a la inaccesibilidad de dicha región también se deben planificar grandes inversiones en infraestructura, como carreteras, una vía férrea para transportar los minerales y una represa hidroeléctrica para suministrar la electricidad necesaria. Esta última se llama Represa Chollet, llamada así por un tramo de cascadas en el río Dja, descrito por el propio WWF como "un sitio prístino". (13)

WWF se ha involucrado y ha estado en connivencia con la persecución y el desalojo de los Pueblos Indígenas y otras comunidades de la región en nombre de la 'protección' de la naturaleza. Sin embargo, la ONG no ha anunciado medidas similares contra las empresas que promueven la minería, las grandes infraestructuras y las represas hidroeléctricas en esta misma zona. La explicación puede encontrarse en una reciente propuesta de proyecto (rechazada) que WWF presentó a la UE para crear otra Área Protegida, el Parque Messok Dja.

En esta propuesta, WWF argumenta que espera que las empresas mineras financien sus 'medidas de protección' en la zona de Triodom. En otras palabras, el nuevo Parque podría verse como una compensación del daño causado por la minería y la infraestructura relacionada a ella. Además de esto, los ecoguardias apoyados por WWF han estado involucrados en graves violaciones de derechos humanos, que incluyen palizas, torturas, abusos sexuales e incluso el asesinato de miembros de las comunidades indígenas que viven en Messok Dja, el nuevo Parque propuesto. (14)

La tremenda contradicción de perseguir a quienes han convivido con los bosques y los han conservado, mientras guardan silencio sobre los planes de las empresas mineras, revela los intereses reales de las actuales políticas de 'conservación', a saber, la continuidad de un modelo destructivo general basado en las ideas y creencias de los procesos de colonización y los colonizadores, antiguos y nuevos. La solidaridad con las comunidades que resisten y enfrentan los impactos de la 'conservación sin gente' es imperiosa. Empresas como APN representan y refuerzan estas creencias y políticas de la 'conservación sin gente'.

Secretariado Internacional del WRM

(1) REDD-Monitor, Stop the evictions of 70,000 Maasai in Loliondo, Tanzania, Enero de 2022, <https://redd-monitor.org/2022/01/27/stop-the-evictions-of-70000-maasai-in-loliondo-tanzania/>

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

- (2) Death in the Garden Podcast, Dr. Mordecai Ogada (Part 2) - A case for scrutinizing the climate narrative, Noviembre de 2021, <https://open.spotify.com/episode/7aW3CEjGj2jW8u49HziewT>
- (3) CNBC, Jeff Bezos names first recipients of his \$10 billion Earth Fund for combating climate change, Noviembre de 2020, <https://www.cnbc.com/2020/11/16/jeff-bezos-names-first-recipients-of-his-10-billion-earth-fund.html>
- (4) The Nature Conservancy, 30x30: Protect 30% of the Planet's Land and Water by 2030, Febrero de 2020, <https://www.nature.org/en-us/magazine/magazine-articles/30x30-wyss-foundation-interview/>
- (5) Le Monde Diplomatique, From apartheid to philanthropy, Febrero de 2020, <https://mondediplo.com/2020/02/13african-parks-box>
- (6) African Parks Annual Report 2020, https://www.africanparks.org/sites/default/files/uploads/resources/2021-06/AFRICAN%20PARKS%20-%202020%20Annual%20Report%20-%20Web%20Ready%20-%20LowRes_3.pdf
- (7) Idem (6)
- (8) African Parks, Climate Action, <https://www.africanparks.org/climate-action>
- (9) Sane Pashane Zuka, Brenda-Kanyika Zuka. Traitors Among Victims: The Case of Market-Community Wildlife Collaborative Management in Malawi's Majete Wildlife Reserve. Advances in Sciences and Humanities. Vol. 2, No. 5, 2016, pp. 40-47, file:///Users/Usuario/Downloads/10.11648.j.ash.20160205.11.pdf
- (10) Boletín del WRM, Setiembre de 2021, La región Sangha de la República del Congo, <https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/la-region-sangha-de-la-republica-del-congo>
- (11) Rainforest Foundation, Protected areas in the Congo Basin: Failing both people and biodiversity?, 2016, <https://www.rainforestfoundationuk.org/media.ashx/protected-areas-in-the-congo-basin-failing-both-people-and-diversity-english.pdf>
- (12) REDD-Monitor, African Parks Network plans to sell carbon from Odzala-Kokoua National Park in Republic of Congo, 2011, <https://redd-monitor.org/2011/09/06/african-parks-network-plans-to-sell-carbon-from-odzala-kokoua-national-park-in-republic-of-congo/>
- (13) REDD-Monitor, TRIDOM – one of the largest trans-boundary wildlife areas in Africa faces critical new threats. Far from protesting, conservationists are looking to cash-in on the destruction, 2022, <https://redd-monitor.org/2022/01/14/tridom-one-of-the-largest-trans-boundary-wildlife-areas-in-africa-faces-critical-new-threats-far-from-protesting-conservationists-are-looking-to-cash-in-on-the-destruction/>
- (14) Idem 13

RECOMENDADOS

“La historia colonial y la crisis ambiental están estrechamente ligadas”

El libro *'Une écologie décoloniale'* (una ecología decolonial), escrito por Malcom Ferdinand, quien nació y creció en Martinica, una isla en el mar Caribe con estatus de región y departamento de ultramar de Francia, presenta un análisis sobre cómo no podemos entender la crisis ambiental actual sin conocer la historia colonial. Su libro explora cómo la esclavitud no fue solo un sistema que monopolizó violentamente los cuerpos negros, sino que también participó de esta forma violenta de habitar la tierra, habitarla de un modo colonial, en particular a través de plantaciones y monocultivos de exportación. Sin embargo, cuenta el autor que esta forma colonial de vivir no se abandonó con la abolición de la esclavitud. Por el contrario, en varios países se ‘concedió’ su abolición a condición de poder continuar con esta manera colonial de habitar la tierra. El autor concluye que “Si es posible reconocer el daño ambiental del pasado, entonces es igual de importante reconocer los crímenes coloniales de ese mismo pasado y los efectos que se extienden hasta la actualidad.”

Lea una entrevista en el portal Ecología Política en español aquí

<https://www.ecologiapolitica.info/?p=14593>

Títulos de tierra del Grupo Jari Celulose en Brasil declarados ilegales

Una Acción Civil Pública por parte de la Fiscalía de Justicia Agraria del estado de Pará en Brasil contra el Grupo Jari Celulose solicita la nulidad de parte de sus títulos de propiedad. La Acción Civil surge de la investigación de sucesivas prácticas fraudulentas e ilegales relacionadas con la emisión de títulos de tierra y fraude en los registros públicos en un área de alrededor de 126 mil hectáreas, en el municipio de Almeirim, desde 1937. El Grupo Jari Celulose está involucrado en negocios de tala y tiene proyectos de venta de créditos de carbono REDD+. Vea más información sobre esta empresa en [este artículo del boletín del WRM](#); y sobre la Acción Civil lea un artículo en portugués aquí <https://www2.mppa.mp.br/noticias/acao-requer-cancelamento-de-registros-imobiliarios-realizados-pela-jari-celulose.htm>

A la vanguardia: Historias de resistencia de mujeres africanas

La organización Internacional *Labour Research and Information Group* (Grupo Internacional de Investigación e Información Laboral) ha producido un calendario bellamente ilustrado e inspirador para 2022. Cada mes retrata una historia de liderazgo y participación de las mujeres en la organización radical contra la opresión en África. Las historias seleccionadas en este calendario, representativas de una historia mucho más amplia de resistencia de las mujeres en el continente, rechazan las conceptualizaciones que describen a las mujeres africanas como sumisas. Estas historias revelan que las mujeres africanas tienen un rico historial de resistencia, han desempeñado papeles importantes y han desarrollado tácticas innovadoras en la construcción, defensa y avance de las luchas emancipadoras. Organizaciones y movimientos pueden obtener fuerza e inspiración de estas historias. Pueden descargar el calendario (en inglés) en: <https://ilrigsa.org.za/2022-calendar/>

La memoria colectiva del Pueblo Madja en Brasil

Con el título 'Ima Bote Madjacca: Mitos Madja', la antropóloga Rosenilda Nunes Padilha (Rose) ha lanzado un libro con los mitos del pueblo Madja (también conocido como Kulina). Todo el libro fue escrito en madja y portugués. Para ello contó con la participación de los propios Madjá: Zuao Kulina, Jacinami Kulina, Macari Kulina, Dsomo Kulina y también contó con el aporte de Walter Sass, antropólogo misionero que convivió varios años con los Madja. Era necesario hacer algo que afectara la memoria colectiva del pueblo, dice el autor. El libro fue publicado por Cimi - Consejo Misionero Indigenista, Región Amazonía Occidental. Lea una entrevista sobre el libro en portugués aquí https://port.pravda.ru/cplp/54004-povo_indigena/

Total anuncia más acaparamientos de tierras para compensar sus emisiones

Un artículo del portal de noticias Mongabay alertó sobre el anuncio del gigante petrolero francés Total Energies de establecer una plantación de monocultivos de 40.000 hectáreas en las sabanas de la República del Congo para compensar sus emisiones. El proyecto, que plantará acacias no autóctonas, será administrado por su propia Unidad de Soluciones Basadas en la Naturaleza. La empresa Total, en asociación con la consultora maderera francesa Forêt Ressources Management (FRM), tiene como objetivo también producir madera a partir de la plantación industrial, para generar más ganancias. Varias comunidades indígenas y campesinas se verán afectadas por el proyecto. Además de este masivo proyecto de compensación que implica la plantación de árboles, Total también se dedica a explorar la extracción de petróleo en dos bloques ubicados en los bosques tropicales del norte del país. Al mismo tiempo, Total expande sus proyectos de extracción de gas licuado en todo el mundo. Pueden leer el artículo (en inglés) en: <https://news.mongabay.com/2022/01/at-a-plantation-in-central-africa-big-oil-tries-to-go-net-zero/>

Todos los artículos del Boletín pueden ser reproducidos y difundidos utilizando la siguiente fuente: Boletín 260 del Movimiento Mundial por los Bosques tropicales (WRM): "Concesiones de Tierra: una Causa Subyacente de Deforestación" (<https://wrm.org.uy/es/>)

[Suscríbete al Boletín del WRM](#)

El Boletín busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos en la defensa de sus territorios y bosques. La suscripción es gratuita.

¿Te perdiste la edición anterior del boletín del WRM
"Frente a las imposiciones del capital, ¡la lucha continúa!"
Puedes acceder a todas las ediciones pasadas del boletín del WRM en este link

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Editora: Joanna Cabello

Apoyo editorial: Elizabeth Díaz, Lucía Guadagno, Jutta Kill, Winfridus Overbeek y Teresa Pérez

Secretariado internacional del WRM

Av. Bolivia 1962 Bis, CP 11500 Montevideo, Uruguay

Teléfono y fax: 598 26056943 / wrm@wrm.org.uy

<http://wrm.org.uy/es/>